

ISSN 1819-6543

**LEGALIDAD SOCIALISTA No. 37/2012**  
**Revista Electrónica**  
**Fiscalía General de la República de Cuba**



**“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los  
cubanos a la dignidad plena del hombre”**

**José Martí**

## **LEGALIDAD SOCIALISTA**

Año 9, No. 37/ 30 de noviembre de 2012

Revista Digital No. 37

### **EDITADA POR:**

**FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA**

### **DIRECTOR EJECUTIVO**

Msc. Patricia María Rizo Cabrera

### **CONSEJO DE REDACCIÓN**

Msc. Alina Montesino Li

Msc. Fernando Rodríguez Infante

Msc. Osmín Álvarez Bencomo

Lic. Dlxán Fuentes Guzmán

Lic. Miguel Ángel García Alzugaray

### **EDICIÓN Y CORRECCIÓN**

Msc. Caridad Sabó Herrera

Lic. Yanisel Bernal Almira

### **DISEÑO Y DIGITALIZACIÓN**

Lic. Leidy Sánchez Bernal

Lic. Yanisel Bernal Almira

### **REDACCIÓN**

Calle 1ra y 18, No. 1801

Miramar, Playa, La Habana

CP 11 300

Tel.: (537) 206-9066

E-Mail: [relaciones@fgr.cu](mailto:relaciones@fgr.cu)

RNPS: 2076

## **SUMARIO**

Apreciado lector.....	2
XI Encuentro Ciencias Penales 2012 en La Habana.....	3
Intervención de Darío Delgado Cura, Fiscal General de la República en el XI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2012.....	4
La corrupción es uno de los principales enemigos de la Revolución.....	8
Resaltan rol protagónico de la Fiscalía dentro del Sistema Penal cubano.....	10
Fiscal General de Jamaica condena bloqueo de EE.UU. a Cuba.....	11
Seminario Fiscalía General de la República de Cuba- Fiscalía General de la Federación de Rusia.....	12
Ponencias nacionales presentadas en el XI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2012.....	13
El Tráfico ilegal de migrantes/ Autora: Lic. Adriana Herrera Riverón.....	13
El terrorismo y el Derecho Penal del enemigo. Repercusión en Cuba/Autoras: Esp Yania Díaz Álvarez y Esp Nerly Espinosa Rivero.....	28
La Fiscalía en la prevención de la corrupción administrativa en Cuba/Autor: Msc. Reinaldo Cruz Rivera.....	43
Delitos Ecológicos: su tratamiento a partir de los delitos contra los Derechos Patrimoniales/Autoras: Laura de la C. Arencibia Benítez y Maridel Guanche Delgado.....	50
Prisioneros del Imperio.....	61
Glosario de términos jurídicos.....	63

La Revista Legalidad Socialista es una publicación trimestral de la Fiscalía General de la República de Cuba. Constituye un espacio donde se presentan artículos, monografías e informaciones que expresan ideas personales de diversos autores.

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de exponer sus valoraciones mediante notas aclaratorias. Posee la potestad para realizar cambios relacionados con la estructura, título, extensión, redacción y estilo de los trabajos presentados, a favor de la calidad de la Revista.

Los especialistas en asuntos jurídicos y lectores pueden enviar sus opiniones y/o sugerencias a la Redacción de esta publicación.

## **Apreciado Lector:**

La Fiscalía General de la República realiza esta edición especial de la revista “Legalidad Socialista” para presentarle las memorias del XI Encuentro Internacional Ciencias Penales, celebrado en La Habana del 2 al 4 de octubre de 2012, con la participación de más de 200 delegados nacionales y extranjeros.

Este evento, que ya es tradicional en el ámbito internacional por su frecuencia, alcance y contenido, cumplió dos décadas de existencia y reunió en su oncenaria edición a profesionales y técnicos interesados en el intercambio de experiencias sobre el desarrollo de las distintas disciplinas de las Ciencias Penales.

En esta ocasión el evento contó con la presencia de destacados expositores internacionales y nacionales, quienes abordaron temáticas de suma importancia y actualidad como la prevención y el enfrentamiento al tráfico ilegal de drogas y de personas, el terrorismo, los delitos económicos y la corrupción.

Agradecemos a los conferencistas, invitados y a los ponentes por el esfuerzo intelectual en la preparación de sus disertaciones, las que generaron profundas reflexiones y fructíferos debates entre los participantes.

Estas memorias recogen algunas de las conferencias y ponencias presentadas, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una cultura de la investigación y la superación científico-técnica de los profesionales del Derecho.

**Darío Delgado Cura**  
**Fiscal General de la República de Cuba**

## XI ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES EN LA HABANA



**FOTO: Carlos Pujol Santana**

El XI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2012, auspiciado por la Fiscalía General de la República de Cuba, abrió sus puertas desde el 2 al 4 de octubre en el Palacio de Convenciones de La Habana a más de 300 delegados de 17 países, se incluyeron sesiones plenarias, talleres, mesas redondas y ponencias sobre aspectos de actualidad en las diversas disciplinas penales

Los debates se efectuaron sobre el enfrentamiento al tráfico de drogas e inmigrantes, el terrorismo, la corrupción y los delitos ecológicos,

Durante tres jornadas, jueces, asesores jurídicos, fiscales, procuradores, criminalistas, profesores, y estudiantes, asistentes nacionales y foráneos, intercambiaron experiencias acerca de su labor en países de Asia, África, América Latina y el Caribe.

## **INTERVENCIÓN DE DARÍO DELGADO CURA, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA EN EL XI ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2012**



**FOTO: Carlos Pujol Santana**

### **ESTIMADOS DELEGADOS E INVITADOS:**

En nombre del Comité Organizador del **XI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2012**, tengo la satisfacción de expresarles el más cálido y afectuoso saludo de bienvenida a todos los participantes en este evento.

La presencia de colegas procedentes de diversas latitudes, junto a los profesionales cubanos, nos llena de regocijo y es una evidente prueba del interés que despiertan las temáticas que serán objeto de debate.

Durante las 10 ediciones anteriores, participantes nacionales y de diferentes países, han reflexionado seriamente sobre qué esperar de las Ciencias Penales ante los nuevos escenarios de nuestras sociedades.

Esta respuesta sin lugar a dudas varía de un país a otro. Para los cubanos está estrechamente vinculada al papel del Derecho en la Revolución, y a la práctica revolucionaria a lo largo de varios siglos, en los que ha primado una vocación y respeto por el Derecho y la Legalidad, y donde la educación y la cultura, junto a la salud, son de las más preciadas conquistas de nuestro modelo económico y social, y valedores imprescindibles, que le permiten a nuestro pueblo, alcanzar resultados en este y otros asuntos.

Desde esta perspectiva, se requiere que las Ciencias Penales estén imbuidas de un profundo contenido ético, que contribuya al adecuado funcionamiento de nuestros sistemas sociales, que influyan en el respeto de las normas, que estén a la altura de las transformaciones que se han emprendido y que sean capaces no solo de servir de instrumento para los cambios, sino que también sean portadoras de valores y principios.

Sin disminuir la importancia del desarrollo teórico y práctico de las distintas disciplinas que integran las Ciencias Penales, la razón de ser de las mismas, son en la práctica, la prevención y la lucha contra el delito, como fenómeno negativo que lamentablemente, se internacionaliza con la misma fuerza y rapidez, e incluso muchas veces con más diligencia, que la globalización contemporánea.

En el plano teórico se afirma que ocurre una expansión del Derecho Penal, que manifiesta la respuesta del Estado a las crecientes demandas de seguridad ciudadana, frente a la percepción de un incremento de la criminalidad clásica y aparición de nuevos riesgos inherentes a la modernidad. Esta expansión conlleva una tensión con las garantías propias del Derecho Penal.

Ya no se trata de proteger los bienes jurídicos clásicos (vida, integridad corporal, salud, libertad, propiedad y algunos más, a veces de carácter colectivo); la protección jurídico penal se extiende a nuevos intereses que han surgido como producto del desarrollo tecnológico y económico. Tampoco dicha protección lo es únicamente frente a conductas que lesionan o ponen en peligro el bien jurídico, sino que suelen extenderse a momentos muy anteriores a su efectiva puesta en peligro.

Es necesario analizar el fenómeno delictivo y sus consecuencias, para propiciar dar respuesta “jurídica” a las nuevas formas de conducta que se suceden en la actual sociedad globalizada, sin olvidar que el Derecho Penal es de última ratio.

Al respecto consideramos que el Derecho Penal debe hacer frente a tales peligros, con firmeza y criterios de racionalidad y teniendo en cuenta que se corre el riesgo de que dicha barrera protectora se adelante de tal manera, que termine castigando conductas que perfectamente pueden ser comprendidas en otras esferas sancionatorias, como puede ser el Derecho Administrativo y contravencional.

Al convocar este evento, perseguimos que los debates e intervenciones que se produzcan, propicien un intercambio de experiencias dirigido a buscar las soluciones mas oportunas, para un debido proceso penal ágil, que sea capaz de garantizar una adecuada justicia social y que dé solución a las problemáticas planteadas.

Los innumerables problemas políticos, económicos, ecológicos y sociales que afectan hoy al mundo, han venido generando y acumulando una gran cantidad de efectos negativos, con el consiguiente incremento del delito en sus disímiles modalidades y muy en particular, en lo que respecta a la corrupción, la droga, el tráfico ilegal de migrantes y el terrorismo.

Sobre estas actividades delictivas con frecuencia se plantea que los países en desarrollo pueden ser más vulnerables a los mismos y se acota además que padecen limitaciones para responder eficazmente a tales problemas.

Lo referido puede ser cierto en determinada medida, pero si no identificamos también las verdaderas causas que condicionan tales males, tampoco podremos determinar acertadamente las estrategias y tácticas efectivas para combatir y prevenir los problemas que nos ocupan.

En nuestra opinión, ha quedado claramente demostrada la vinculación de estos fenómenos, con condiciones de vida que degradan la dignidad humana en muchas partes del mundo y que constituyen factores determinantes del delito como son: el desempleo, la miseria, el analfabetismo, la discriminación racial y la injusticia, por citar algunos.

En lo que respecta a la corrupción, en su acepción más genérica, es considerada un flagelo, capaz de amenazar el desarrollo social, económico y político de un país y minar los fundamentos de cualquier Estado o sociedad. En Cuba, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, Tribunal Supremo Popular, Ministerio del Interior, y todos los Órganos de la Administración Central del Estado y entidades, adoptan las medidas necesarias para su prevención y reducción, obteniéndose resultados.

El tráfico de drogas, es sin dudas una actividad delictiva extremadamente peligrosa, que alcanza magnitudes a nivel global, traspasa fronteras, regiones y se expande por todo el orbe, constituyendo una amenaza que afecta a millones de personas, provocando su deterioro físico y mental, al tiempo que engendra violencia, el comercio ilegal de armas, corrupción, inestabilidad social e ingobernabilidad, entre otros males.

Cuba, no escapa a estas amenazas, dada su ubicación geográfica y sus crecientes nexos internacionales y a los empeños de algunos grupos narcotraficantes foráneos, por tratar de utilizar nuestro territorio o sus inmediaciones para desarrollar operaciones de transportación de droga proveniente de países productores o de tránsito, con destino a los principales mercados.

Ante tal coyuntura, nuestro Estado, consciente de su responsabilidad y compromiso internacional en torno al combate a las drogas, ha desplegado políticas y otorgado los recursos necesarios para enfrentar con éxito tales desafíos.

Estamos convenidos además, de que solo mediante el incremento de la cooperación dirigida a desarrollar la capacidad de lucha, indisolublemente ligada a la promoción y desarrollo de una política coherente en el campo de la prevención, podremos dar una respuesta adecuada a la creciente influencia del narcotráfico en la región, cuyo principal mercado continúa siendo los Estados Unidos de América.

Otro fenómeno que azota hoy al mundo es el Tráfico Ilegal de migrantes, modalidad delictiva que se produce como consecuencia del injusto orden económico mundial que condena, a más de las dos

terceras partes de los habitantes del planeta a una condición de ciudadanos de segunda categoría, sin acceso a niveles adecuados de alimentación, salud, educación y cultura.

Un momento de reflexión especial requiere en nuestra opinión el terrorismo.

Son innegables la magnitud y complejidad de estas manifestaciones delictivas, sobretudo en su modalidad más peligrosa, el Terrorismo de Estado, por las perniciosas consecuencias que provoca para cualquier sociedad.

Para el pueblo cubano, la lucha contra el terrorismo reviste una especial connotación.

Cuba, jamás ha permitido ni permitirá la utilización de su territorio nacional para la realización, planificación o financiamiento de actos de terrorismo contra cualquier otro Estado. Por ello rechaza totalmente que se utilice el enfrentamiento al terrorismo como pretexto para justificar la intromisión en los asuntos internos de otros Estados, la agresión y el menoscabo a la soberanía nacional. Para enfrentar estas complejas conductas delictivas es imprescindible que exista también, un alto nivel de coordinación entre las instituciones que tienen a su cargo la prevención y lucha contra la criminalidad.

En este sentido resulta importante destacar la actitud del Gobierno de los Estados Unidos, que ampara a terroristas confesos que han actuado o actúan impunemente contra Cuba desde hace más de cinco décadas. Entre ellos, Luís Posada Carriles, autor entre otros repudiables crímenes, de la voladura en pleno vuelo en 1976, de una aeronave civil cubana, hecho en que violentamente perdieron sus vidas 73 personas inocentes y que en los próximos días recordaremos el 36 Aniversario.

El autor de este repudiable crimen y de otros no menos horrendos actos de terrorismo, vive tranquilamente en el territorio norteamericano, con la anuencia y protección de las autoridades judiciales y del Gobierno de ese país, que cínicamente se considera campeón en la lucha contra el terrorismo y por la protección de los Derechos Humanos, mientras en nombre de ello desata innumerables guerras de rapiña en diversas partes del mundo.

Sin embargo ese mismo Gobierno mantiene injustamente detenidos hace 14 años a 4 cubanos y uno en libertad supervisada después de cumplir su larga condena, por arriesgar sus vidas para descubrir e informar los planes terroristas que la mafia cubano americana realizaba contra nuestro pueblo, manteniéndolos separados de sus seres más queridos, sin permitirles las visitas establecidas.

En cumplimiento de un mandato de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Fiscalía General de la República, junto a otros órganos y organismos, trabaja actualmente en un análisis integral del Sistema de Justicia Penal del país, con el objetivo de perfeccionarlo y actualizarlo, teniendo en cuenta lo más avanzado del pensamiento penal contemporáneo y dando respuestas a temas no resueltos, que sabemos aún tenemos, pero fundamentalmente, adaptando ese Sistema Penal a nuestra realidad, a nuestras verdades, a las ideas que hoy defendemos y continuaremos defendiendo. Este empeño generará modificaciones importantes al Código Penal, a la Ley de Procedimiento Penal y otras normas legales, a nuestras estructuras y también a nuestros modelos de actuación dentro del Sistema Penal cubano.



**Estimados delegados e invitados.**

La urgencia de los retos que hemos señalado, nos exige sin dilación consolidar y perfeccionar nuestras instituciones, para cumplir con eficacia, eficiencia, agilidad y racionalidad el rol que nos demandan nuestras leyes y nuestros ciudadanos, por lo que tenemos el deber de contribuir todos, a forjar un mundo mejor y más justo, que sin lugar a dudas es posible.

José Martí, Héroe Nacional de Cuba, y uno de los más preclaros pensadores de nuestro pueblo y de América, sentenció el 13 de mayo de 1883, en carta publicada en el Diario “La Nación” de Buenos Aires, cito: **“No se ha de permitir el embellecimiento del delito porque, es como convidar a cometerlo”.**

**Muchas Gracias**

.....

## **LA CORRUPCIÓN ES UNO DE LOS PRINCIPALES ENEMIGOS DE LA REVOLUCIÓN**

**(Tomado de: Periódico Granma, edición del 3 de octubre de 2012)**

*La Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela, subrayó la necesidad de prever y enfrentar en nuestro país cualquier manifestación de indisciplina e ilegalidad. Destaca el Fiscal General de la República, Darío Delgado Cura, que se trabaja actualmente en un análisis integral del Sistema de Justicia Penal*



En el enfrentamiento contra los delitos económicos y el incumplimiento de la legalidad resulta imprescindible disponer de alta ética y profesionalismo, además de la más efectiva colaboración de todos los sujetos e instituciones que intervienen en los procesos administrativos y penales, enunció durante una intervención especial en el XI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2012, Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República.

La Vicepresidenta del Consejo de Estado indicó que con el fin de promover una gestión administrativa más eficiente que garantice arremeter contra expresiones de indisciplina e ilegalidad, resulta primordial lograr el diseño e implementación de sistemas de control internos flexibles e integrales desde la base hasta los niveles superiores.

Estos sistemas tienen que ser capaces de organizar y conciliar sus funciones para cumplir con máxima economía, eficiencia y eficacia los objetivos y metas asignados —elementos todos contenidos en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados durante el Sexto Congreso del Partido—, apuntó.

En el enfrentamiento contra los delitos —agregó la Vicepresidenta— es primordial la labor de los auditores, quienes deben guiarse por las disposiciones cubanas de auditoría, integradas y perfeccionadas en las nuevas normas y el código de ética —actualmente en proceso de análisis—, los cuales fungirán a partir de enero del 2013.

Asimismo, durante la jornada inaugural, tras darles la bienvenida a los participantes, Darío Delgado Cura, Fiscal General de la República de Cuba, destacó el papel del Derecho en la Revolución, y a la práctica revolucionaria a lo largo de varios siglos, en los que ha primado una vocación y respeto por el Derecho y la Legalidad.

Explicó también que en cumplimiento de un mandato de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Fiscalía General de la República, junto a otros órganos y organismos, trabaja actualmente en un análisis integral del Sistema de Justicia Penal del país, con el objetivo de perfeccionarlo y actualizarlo, teniendo en cuenta lo más avanzado del pensamiento penal contemporáneo y dando respuestas a temas no resueltos, que sabemos aún tenemos, pero fundamentalmente, adaptando ese Sistema Penal a nuestra realidad, a nuestras verdades, a las ideas que hoy defendemos y continuaremos defendiendo. Este empeño generará modificaciones importantes al Código Penal, a la Ley de Procedimiento Penal y otras normas legales, a nuestras estructuras y también a nuestros modelos de actuación dentro del Sistema Penal cubano.

Además de la corrupción y el delito económico, fueron temas centrales del evento el tráfico ilegal de drogas y de personas, el terrorismo, entre otros.

.....

## RESALTAN ROL PROTAGÓNICO DE LA FISCALÍA DENTRO DEL SISTEMA PENAL CUBANO

(Tomado de: Periódico Granma, edición del 5 de octubre de 2012)



**FOTO: Carlos Pujol Santana**

El Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional de Cuba, José Luis Toledo Santander, hizo especial hincapié —durante el último día de sesiones del cónclave dedicado a las Ciencias Penales—, en el papel de la Fiscalía en la prevención y enfrentamiento de actos delictivos.

El también Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana significó que el rol protagónico destinado a esta institución está dado —según Toledo Santander— por tres motivos esenciales: el indudable papel que cumple la Fiscalía en la eficacia de la persecución penal y en la manifestación práctica de la defensa de los valores ético-sociales que el Estado cubano ha decidido proteger; en su función de controlador del cumplimiento de los principios y garantías procesales; además de que, por su posición intermedia en la estructura institucional penal y su condición de motor impulsor de la investigación y de la acción penal pública, esta institución deviene en un necesario puesto de observación e información para la Dirección del Estado cubano sobre el funcionamiento del sistema de justicia.

Con el fin de reforzar el prestigio de la Fiscalía, Toledo hizo un llamado a evitar investigaciones ineficientes o violatorias de garantías jurídicas-procesales.

.....

## FISCAL GENERAL DE JAMAICA CONDENA BLOQUEO DE EE.UU. A CUBA

(Tomado de: [www.adelante.cu/.../2528-fiscal-general-de-jamaica-condena-bloque...](http://www.adelante.cu/.../2528-fiscal-general-de-jamaica-condena-bloque...))



**FOTO: Carlos Pujol Santana**

Patrick Atkinson, Fiscal General de Jamaica, condenó el bloqueo que Estados Unidos impone a Cuba desde hace más de medio siglo en su intervención en el XI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2012, celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Atkinson planteó además, que su país ha denunciado en múltiples foros esa maniobra aislacionista de Washington, que ha ocasionado al pueblo cubano daños económicos superiores al billón 66 mil millones de dólares.

Estas declaraciones del Fiscal General acontecen a los pocos días de efectuados los debates al más alto nivel, correspondientes al período 67 de sesiones de la Asamblea General de la ONU, ámbito en el cual decenas de Estados -entre estos Jamaica- ratificaron su rechazo al bloqueo de EE.UU. contra Cuba.

En el Encuentro Internacional de Ciencias Penales, Atkinson también recordó a los más de 200 participantes (de Latinoamérica, Europa, Asia y África) que el delito transnacional es un enemigo común de todas las naciones, que no reconoce fronteras ni idiomas, está bien organizado y financiado, y adopta las formas más sofisticadas.

Indicó que eventos como este contribuyen a fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra cualquier tipo de actividad delictiva, principalmente relacionadas con el terrorismo, el tráfico de personas y de estupefacientes.

Debemos vestirnos con ropaje de principios y utilizar la justicia para ganar esta batalla, remarcó.

.....

## SEMINARIO FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA-FISCALÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA



**Fotos: Carlos Pujol Santana**

En el marco del XI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2012, se desarrolló los días 2 y 3 de octubre el Seminario para dar continuidad a las actividades del Programa de Cooperación entre la Fiscalía General de la República de Cuba y la Fiscalía General de la Federación de Rusia.

La inauguración del Seminario estuvo a cargo de Darío Delgado Cura Fiscal General de la República, quien dio la bienvenida a los participantes y exhortó a que su realización se convirtiera en un fructífero intercambio de experiencias, que contribuya a perfeccionar el trabajo de ambas instituciones.

Con posterioridad intervino el Sr. Iván G. Semchishin, Vicefiscal General de la Federación de Rusia.

Durante la realización del Seminario, especialistas cubanos y rusos presentaron ponencias, reflexionaron e intercambiaron experiencias sobre la extradición y prestación de la Asistencia Judicial en materia penal.

El Msc. Rafael Pino Bécquer Vicefiscal General de la República explicó el papel de la Fiscalía en la Asistencia Judicial en materia penal.

Resultaron evaluados otros temas como:

- Experiencia de la Fiscalía en la Asistencia Judicial Internacional.
- Actuación en la Confiscación de Bienes provenientes de corrupción en el proceso penal.
- Las confiscaciones provenientes de los procesos administrativos.
- El enfrentamiento a los delitos de índole terrorista.
- Experiencias de colaboración internacional con otros Ministerios Públicos y organismos competentes en materia de terrorismo.

## PONENCIAS PRESENTADAS EN EL XI ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2012

### TÍTULO: “EL TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES”



**AUTORA: Lic. Adriana Herrera Riverón**  
**Fiscal Municipal / Banes Provincia Holguín.**

### INTRODUCCIÓN

Si el siglo XXI ha de ser el siglo de los derechos humanos, entonces es absolutamente esencial ganar la lucha por la igualdad de una punta a otra del planeta.

Hace ya demasiado tiempo que la diversidad de raza y de cultura ha sido tratada más como una amenaza que como un don, a menudo se ha hecho frente a esta amenaza con el desprecio y el conflicto racial, con exclusión, discriminación e intolerancia. Muchas partes del mundo han presenciado una incidencia creciente de la migración y el tráfico ilegal dentro de los países y regiones, así como entre ellos. Ello implica una cierta preocupación por los derechos humanos.

Centenares de miles de personas abandonan sus lugares de residencia buscando mejores condiciones de vida, yendo de las zonas rurales a las urbanas, y de los países más pobres a los más ricos. Las causas por las que las personas cambian de residencia son variadas: económicas (están sin trabajo y van a otro lugar donde existe una amplia oferta de empleo), por catástrofes naturales (como terremotos, malas cosechas, inundaciones, sequía), socioculturales (por su deseo de mejorar la calidad de vida en un entorno natural más atractivo y con mayores servicios educativos y tecnológicos) y por guerras y persecuciones políticas o religiosas. En la actualidad, las migraciones internacionales son numerosas, por ejemplo Europa occidental recibe inmigrantes de Europa del Este, de Latinoamérica y de África. Desde hace veinte años, España se ha convertido en un país receptor de inmigrantes y Estados Unidos recibe población desde Latinoamérica.

Estos movimientos migratorios pueden provocar desequilibrios espaciales pues unas regiones aparecen superpobladas, y otras, poco pobladas; surgen ‘cinturones de miseria’ y barrios degradados, sin agua potable ni luz y sociales ya que se desconoce el idioma que se habla en el lugar de destino y

por eso se reducen las posibilidades de trabajo; las costumbres religiosas son diferentes; aumentan el paro, la delincuencia, la inseguridad.

Por lo general, emigran las personas más fuertes, los jóvenes: en el lugar de destino aumenta la población joven, mientras que se produce un proceso de envejecimiento en los lugares de origen. Esto influye en la economía: los países de acogida generan más riqueza, mientras que los de partida se empobrecen.

Sin embargo, mucha de esa gente se encuentra con una discriminación sistemática o se convierte en víctima de las redes internacionales del crimen organizado. Precisamente este fenómeno da lugar al incremento del tráfico ilegal de migrantes, cuya definición se basa en la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

## **CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES DOCTRINALES Y REGULACIONES EN TORNO AL TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES.**

### **I.1 Análisis de las características y comportamiento del Tráfico Ilegal de Migrantes.**

Tráfico ilegal de personas y/o tráfico ilegal de migrantes son términos utilizados para describir la transportación de gente, por una variedad de razones, a través de fronteras internacionales hacia un punto de entrada no oficial de un país de destino. Típicamente puede que quienes son transportados no tengan documentos adecuados para viajar formalmente o que no tengan aprobación previa para entrar al país de destino.

Esta es una forma de traficar seres humanos que se manifiesta siempre con un carácter transnacional. Es además la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material que suele realizarse en condiciones peligrosas o degradantes, donde los migrantes lo consienten y termina con la llegada de los migrantes a su destino.

Las personas que transportan migrantes de forma ilegal son frecuentemente empleados por refugiados que huyen de algún tipo de persecución; aunque también mucha gente que es transportada de esta forma busca mejorar su empleo y sus oportunidades financieras. Pero con las crecientes restricciones en política mundial referente a refugiados, los inmigrantes ilegales que huyen de la persecución o de extremas condiciones de vida son frecuentemente interpretados como meros migrantes económicos.

La INTERPOL, en un comunicado reciente, describe el tráfico ilegal de gente como: El tráfico ilegal de gente se ha tornado en el oficio preferido de un número creciente de redes criminales a nivel mundial que muestran una mayor sofisticación a lo que se refiere mover grandes números de personas con un mayor margen de ganancia que nunca antes.

Se trata de redes de delincuentes cuyos integrantes persiguen, por encima de todo, el lucro económico, los que además no tiene inconveniente en utilizar las estructuras de su asociación criminal previamente existente para llevar a cabo una compleja variedad de actividades delictivas, con el propósito de traficar con seres humanos como si fuesen cosas, mercancías o puros organismos físico-biológicos. Como objetos manipulados en aras de la rentabilidad mercantil, mediante el engaño, la explotación sexual o laboral.

El surgimiento de nuevas y complejas formas de criminalidad en los últimos tiempos, y especialmente las relacionadas con la denominada criminalidad organizada, justifica que junto al proceso de discriminación de determinadas conductas de escasa peligrosidad social, exista en la actualidad una tendencia a criminalizar otras, como el blanqueo de dinero, la corrupción, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que han sido recogidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y sus Protocolos.

La trata de seres humanos no es un fenómeno nuevo y, además, desgraciadamente no deja de aumentar. Las razones que empujan a tan alto número de personas a dejar su país son múltiples: unos quieren huir de la pobreza, buscar una vida mejor; otros escapan de la guerra, de las persecuciones y violaciones de los Derechos Humanos. Y las redes criminales se han dado cuenta desde hace tiempo de los inmensos beneficios que pueden sacar de la miseria de esos candidatos. Además, el tráfico de seres humanos se ejerce a escala mundial, y extiende sus redes cada vez más con más beneficios que son ofertados por los traficantes como son: falsos documentos, alojamiento, transporte, etc.

Los traficantes conocen como presentar documentos de solicitud de asilo, se burlan de los controles fronterizos y se aprovechan de los vacíos legales y jurídicos en los países de acogida; así como de la falta de coordinación entre ellos. Cuando llegan a los países de destino, esas víctimas están sin papeles y a merced de los traficantes: No conocen ni el idioma, ni la cultura, ni el sistema jurídico del país a donde han llegado, por lo que se vuelven vulnerables.

Las víctimas de trata o tráfico, sean o no solicitantes de asilo, que se ven obligadas a ponerse a merced de las redes criminales internacionales, se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y expuestas a todo tipo de vejámenes y maltratos.

Es especialmente preocupante el trato duro que reciben los niños y las familias de los migrantes, y el aumento del miedo y el descrédito hacia los inmigrantes, una actitud que se refleja tanto en los sectores privados como en los públicos, y también el trato que se da a las víctimas del tráfico ilegal, tratándolos como criminales por su residencia irregular, sobre la que ellos no tienen ningún control. Esta práctica se convierte en una grave preocupación cuando se institucionaliza y queda reflejada en las acciones de los oficiales de la ley y la judicatura.

El punto de partida para hacer frente al tema de la discriminación racial contra los migrantes, ya sean legales o ilegales, es que tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y la seguridad, el derecho a unas condiciones laborales justas y favorables, el derecho a la asistencia sanitaria y el derecho a un trato idéntico ante la ley. La entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos sobre los



Trabajadores Migrantes constituiría un gran paso adelante por parte de la comunidad internacional para la protección de los migrantes. Hasta ahora catorce estados han ratificado la convención. Hacen falta seis más para que pueda entrar en vigor.

El problema del tráfico ilegal es de alcance mundial y creciente. Se calcula que entre 300.000 y 600.000 mujeres son introducidas ilegalmente cada año en la Unión Europea y en ciertos países de la Europa Central. La práctica se ha extendido también por África y América Latina.

Más de 200 millones de personas viven fuera de sus países de origen, según las cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). En 1960, las mujeres representaban 46,6 % del total de inmigrantes internacionales. Hoy, las mujeres constituyen el 50,5% de los inmigrantes procedentes de América Latina y Caribe.

Más de 30 millones de personas han migrado dentro y fuera de América Latina y el Caribe en las últimas dos décadas, lo que constituye cerca del 5% del total de la población de esta parte del continente. En algunos países como Bolivia, El Salvador, Haití y Nicaragua los y las emigrantes superan el 20% del total de la población, mientras que en otros países como Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Uruguay representan más del 10% del total de sus habitantes.

Traficar con personas humanas constituye una violación en sí misma, pero puede incluir violaciones de un amplio espectro de derechos humanos. Es a menudo el resultado de la pobreza, la discriminación y la exclusión social generalizadas, que destrazan las vidas y destruyen las opciones de muchas mujeres, niños y hombres por todo el mundo.

La protección de las minorías y de los demás grupos vulnerables y el fortalecimiento de la capacidad nacional para la protección han formado parte de la agenda de la comunidad internacional durante más de un siglo, pero aún queda mucho por hacer.

Actualmente el tráfico de personas ocupa el tercer lugar en la cadena delictiva internacional: primero el tráfico de drogas, después el de armas y en tercer lugar el tráfico de seres humanos. Por ello se impone la necesidad de combatirlo con métodos efectivos.

Para las víctimas de problemas de tráfico ilegal, los problemas son más agudos, ya que normalmente se encuentran en una situación muy precaria: acaban de llegar a un país sin documentación, o quizá su documentación les ha sido confiscada o ha sido destruida por el traficante. La persona objeto del tráfico está más obligada a ejercer un tipo de actividad que a menudo es degradante, como la prostitución, la pornografía, el trabajo forzado, o la explotación laboral. Son personas con un miedo constante a la deportación y la penalización, que a menudo les impide protestar o pedir asistencia en casos de violaciones o explotaciones a manos de los traficantes.

Cada año centenares de miles de hombres, y especialmente de mujeres y niños, son engañados, vendidos, forzados u obligados a situaciones de explotación de las que no se pueden escapar. El desarrollo a gran escala del tráfico ilegal de mujeres y niñas para la prostitución es un fenómeno particularmente alarmante que hay que combatir con todos los medios disponibles.

Estas prácticas se convierten en doblemente explotadoras cuando los migrantes o las víctimas de tráfico ilegal son de una raza, o un color, o un linaje, o de un origen nacional o étnico concretos, porque en estos casos a menudo se ven sometidos a la violencia física y a otras violaciones de sus derechos.

Ante el preocupante incremento de este fenómeno, diferentes países del mundo se han pronunciado por estipular como delito en su derecho interno, y consecuente con ello se penalizan cada una de las acciones criminales ejecutadas por los traficantes en aras de frenar un poco la comisión del tráfico ilícito de migrantes.

## **I.2 Regulaciones del Tráfico Ilegal de Migrantes a nivel Internacional.**

La respuesta mundial frente al crecimiento de esta forma de criminalidad fue la Convención contra la delincuencia organizada transnacional firmada en Palermo en el 2000 y los dos protocolos del mismo año: Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional obliga a los Estados—parte a adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas que resulten necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan internacionalmente, diversas acciones delictivas. Esta convención internacional, que fue adoptada por las Naciones Unidas con el propósito de promover la cooperación para prevenir y combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada transnacional, define conceptos tales como el grupo delictivo organizado, delito grave, delito determinante y otros de indudable trascendencia para la aplicación consecuente de sus preceptos.

Ante el incremento de estas conductas contra el normal desarrollo del tráfico migratorio en los últimos años se evidencia una tendencia de los estados a penalizar o agravar las penas para el tráfico ilícito de personas,

A raíz del comportamiento acelerado de este fenómeno, en la Resolución 54/212 de la Asamblea General el 22 de diciembre de 1999, la Asamblea instó a los estados miembros y al Sistema de las Naciones Unidas a que fortalecieran la cooperación internacional en la esfera de la migración internacional y el desarrollo a fin de abordar las causas fundamentales de la migración, especialmente las relacionadas con la pobreza y de aumentar al máximo los beneficios que la migración internacional podía reportar a los interesados, y alentó a los mecanismos interregionales, regionales y subregionales a que cuando procediera se siguieran ocupando de la cuestión de la migración y el desarrollo, convencidos de dar un trato humano a los migrantes y de proteger plenamente sus derechos.

Teniendo en cuenta que no existía un instrumento universal que abordara todos los aspectos del tráfico ilícito de migrantes, y ante la gran preocupación por el aumento de los grupos delictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de migrantes y otras actividades delictivas conexas que

causan graves perjuicios a los estados afectados, además por el hecho de que el tráfico ilícito de migrantes puede poner en peligro la vida y la seguridad de los migrantes involucrados; con el propósito de promover la cooperación entre los Estados Parte para proteger los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico, se creó el Protocolo Contra El Tráfico Ilícito De Migrantes Por Tierra, Mar y Aire, que complementa La Convención De Las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional y se interpreta juntamente con la Convención.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en noviembre del 2000, adoptó el texto definitivo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de los Protocolos Complementarios contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.

El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes es complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y tiene como propósito prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y promover la cooperación con ese fin entre los Estados parte, promoviendo a la vez los derechos de los migrantes que son objeto de dicho tráfico. En el Preámbulo se declara que para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes se requiere un enfoque amplio e internacional, que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeconómicas, en los planos nacional, regional e internacional; así como la necesidad de garantizarle un trato humano a los migrantes y de proteger plenamente sus derechos humanos.

Se demuestra con ello la preocupación de la comunidad internacional por el notable aumento de las actividades de los grupos delictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de migrantes y del peligro que significa para la vida y la seguridad de los migrantes involucrados en esta actividad lucrativa de tráfico de seres humanos que se desarrolla por delinquentes inescrupulosos, que en la mayoría de los casos, ante el peligro de ser descubiertos, tratan de deshacerse de la carga humana sin el menor escrúpulo.

El tráfico ilícito de migrantes es definido en el Protocolo como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado-parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Conforme al propio artículo 3 se define como entrada ilegal el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor. Dicho Protocolo precisa acertadamente que nada de lo dispuesto en el mismo, impedirá que un Estado-parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno, y refuerza el criterio de que los Estados están no solo en la obligación, sino que tienen la potestad de penalizar estas conductas, en correspondencia con sus particularidades y la incidencia del delito en su territorio, reforzando la persecución penal de aquellas conductas de mayor incidencia y peligrosidad.

Se regulan además por el citado protocolo las medidas de cooperación contra el tráfico ilícito de migrantes por mar, la asistencia y protección de las víctimas de la trata de personas, así como las referidas al reforzamiento de los controles fronterizos, la revisión de documentos de viaje, denegación de entrada o revocatoria de visados a las personas involucradas en la comisión de estos

delitos, así como las relacionadas con la calidad y la seguridad de los documentos de identidad y de viaje que se expidan, a los efectos de impedir su falsificación, y las encaminadas a impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.

La capacitación técnica de los funcionarios de inmigración y de otros vinculados a la prevención de estas conductas, a los efectos de mejorar la seguridad y calidad de los documentos de viaje, la detección de los falsificados, la compilación de información para la identificación de los grupos delictivos organizados involucrados en estas actividades delictivas; y otras medidas de prevención encaminadas a lograr que la opinión pública sea más conciente de que esas conductas constituyen una actividad delictiva, que frecuentemente realizan los grupos organizados con fines de lucro y con graves riesgos para los migrantes afectados son regulados por los artículos 14 y 15.

La repatriación hacia su país de origen u otro en el que tuviese derecho de residencia permanente en su territorio, en el momento de su entrada en el estado receptor, de toda persona que haya sido objeto de ese delito, será aceptada por el estado parte, sin demoras indebidas o injustificadas, a cuyos efectos deberá adoptar las medidas procedentes para llevar a cabo la repatriación de manera ordenada y teniendo debidamente en cuenta la seguridad y dignidad de la persona.

Los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas, con arreglo al derecho internacional, no serán afectados por lo dispuesto en el articulado del Protocolo, conforme a la salvaguardia prevista en el artículo 1 inciso k lo que incluye también, el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos.

En relación con la solución de controversias acerca de la aplicación o la interpretación del Protocolo, el artículo 20 regula que los Estados-parte, procurarán solucionarlas mediante negociación, y cuando no resulte posible deberá someterse a arbitraje, y de continuar la discrepancia, cualquiera de las partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al estatuto de la Corte.

Por otro lado, la trata de personas es definida en el Protocolo como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Los términos "trata de seres humanos" y "tráfico de migrantes" han sido usados como sinónimos pero se refieren a conceptos diferentes. El objetivo de la trata es la explotación de la persona, en cambio el fin del tráfico es la entrada ilegal de migrantes. En el caso de la trata no es indispensable que las víctimas crucen las fronteras para que se configure el hecho delictivo, mientras que éste es un elemento necesario para la comisión del tráfico.

El artículo 5 del referido Protocolo se establece que los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal por el hecho de haber sido objetos del tráfico ilícito, y aborda la penalización de estas conductas para los comisores traficantes, y con ello se compromete a los Estados-parte a adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su

derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan intencionalmente, lo que se hace extensivo a la tentativa, la complicidad y lo que se denomina organización o dirección de otras personas en la comisión de estos delitos.

De igual forma se regula detalladamente en el Protocolo la asistencia y protección de las víctimas de la trata de personas conjuntamente con las correspondientes previsiones sobre el régimen aplicable a las mismas y las relacionadas a la repatriación hacia su país de origen u otro en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado-parte receptor.

La criminalidad transnacional, en particular los grupos criminales implicados en actividad ilícita exhibiendo un alto grado de sofisticación, necesitan, para ser contrarrestados, de una contraposición habilitada con todos los instrumentos y las nuevas tecnologías que están a disposición del mercado. Las autoridades investigadoras deben estar en situación de reconstruir las transacciones financieras más complejas utilizando las tecnologías informáticas más sofisticadas.

Por ello la única forma de poner en práctica una campaña idónea contra la criminalidad transnacional es la de poder introducir en los países, a la par que las fuerzas investigadoras, el mismo tipo de profesionalización y de flexibilidad organizativa que caracteriza a las organizaciones criminales transnacionales. Esto último no será posible sin un marco político-jurídico suficiente, compartido por la Comunidad Internacional o, al menos por amplios grupos de naciones afectadas, negativamente, por tales formas de delincuencia entre ellas las derivadas de la inmigración ilegal.

Otros numerosos instrumentos jurídicos internacionales del denominado sistema de las Naciones Unidas y de otros foros internacionales o regionales contienen regulaciones sobre el tráfico de personas y especialmente sobre los derechos de las víctimas de estas conductas, entre los que se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949 vigente desde el 25 de julio de 1951, que ha sido considerado como el texto básico que sobre esta cuestión se ha adoptado a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y su Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, etc.

De esta forma se evidencia la voluntad de la comunidad internacional de apoyar la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes, fenómeno este que desafortunadamente ha alcanzado niveles superiores y que solo se logrará detener su avance con la cooperación de todos los países del mundo, especialmente los más desarrollados quienes deberían aportar todos sus recursos para luchar contra estos actos de criminalidad y a la vez proteger a las víctimas de estos inescrupulosos actos.

## **CAPÍTULO II. COMPORTAMIENTO DEL TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES EN CUBA Y SU REGULACIÓN.**

II.1 Comportamiento en Cuba del Tráfico Ilegal de Migrantes en el período de 1959 hasta la actualidad.

Antes del triunfo revolucionario eran muy contadas las visas que la Embajada de Estados Unidos concedía a los ciudadanos cubanos para emigrar a ese país, lo que constituía una aspiración económica de cientos de millones de personas en todo el mundo, incluidos millones de europeos atraídos por los recursos materiales y el estándar de vida de la nación que emergió intacta de la Segunda Guerra Mundial como el país más rico y poderoso del mundo después de dos grandes contiendas en menos de 25 años, que en cada ocasión devastó el resto de la economía mundial.

Los trámites legales para que un cubano emigrara a Estados Unidos entre 1945 y 1959 eran prolongados y absolutamente rigurosos. Al que ingresaba ilegalmente, violando las leyes de Estados Unidos, lo esperaba irremisiblemente la expulsión o la prisión.

La migración ilegal en nuestro país fundamentalmente hacia los Estados Unidos se potenció a partir de 1959, y ha estado vinculada a la beligerancia del gobierno estadounidense frente a la Revolución Cubana. Estados Unidos ha desarrollado una política de estímulo y asistencia a la emigración ilegal desde Cuba, que es el reflejo de una manipulación política, estrechamente vinculada a los mezquinos intereses de las organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en ese país, y sin importarles sus nefastas consecuencias para cientos de cubanos que han perdido la vida en el estrecho de la Florida.

Los primeros en iniciar las salidas ilegales del país fueron los asesinos, esbirros, torturadores, malversadores y ladrones de la derrocada tiranía de Batista, que allí encontraron lujoso refugio.

En el año 1959 la realidad migratoria entre EEUU y Cuba se comportó de la siguiente manera: Cuba, un pequeño país de 6 millones de habitantes ocupaba el segundo rango en el continente americano en términos de emisión migratoria hacia EEUU. El primer país siempre fue México por razones demográficas, geográficas e históricas evidentes. Cuba, ese pequeño país de 6 millones de habitantes en el 1959, tenía una emisión migratoria más fuerte que todos los países de la América Central y todos los países de América del Sur, reunidos. O sea que un solo país de América Latina, Cuba, emitía más emigrantes hacia EEUU que el total, que la suma de veinte países de América Latina.

La Revolución nunca impidió las salidas legales del país hacia Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo. Los gobiernos de Estados Unidos, por su parte, siempre estimularon las salidas ilegales. La visa dejó de ser un trámite necesario para ser recibido en Estados Unidos, sin excepción alguna, sin importar siquiera los antecedentes penales, o cualquier hecho delictivo que hubiese cometido; jamás uno solo fue devuelto al país. Bastaba la afirmación de que estaban contra la Revolución o contra el socialismo, el comunismo, o que eran perseguidos políticos.

A partir de 1960, se organizó la operación Peter Pan a través de la cual más de 14 mil niños cubanos fueron virtualmente secuestrados por Estados Unidos cuando grupos contrarrevolucionarios, organizados desde los primeros instantes por los órganos de inteligencia de ese país, divulgaron, mediante la edición y distribución clandestina de falsos proyectos de ley, la falsa noticia de que la patria potestad sería suprimida, sembrando el pánico en numerosas familias de capas medias que, atemorizadas, enviaron a sus hijos de forma oculta y sin visa alguna en las mismas líneas aéreas

legales y normales que volaban directamente a Estados Unidos, donde los niños separados de sus padres eran esperados para ser ingresados en orfanatos, e incluso centros de reclusión de menores.

A fines de 1962, el gobierno de Estados Unidos suprimió abruptamente los vuelos normales y las salidas legales del país. Cientos de miles de personas perdieron todo vínculo con familiares residentes en ese país, sólo quedaron las salidas ilegales, estimuladas a la vez por todos los medios como parte de la sucia propaganda contra la Revolución y el socialismo. Esta política dio lugar a sucesivas crisis migratorias.

De esta forma se produjo la interrupción del flujo migratorio por la vía legal, con la consecuente acumulación de un potencial migratorio sin salida por esa vía, pero a la vez sí se mantiene de manera continua la presencia del fenómeno de la emigración ilegal como elemento tendiente a tratar de desestabilizar la sociedad cubana.

En febrero de 1963, la administración Kennedy dio un poderoso estímulo adicional en favor de esas salidas cuando anunció que los cubanos que llegaran a Estados Unidos directamente desde la Isla serían recibidos como refugiados, mientras que los que buscaran entrar desde terceros países serían considerados extranjeros y quedarían sujetos a todas las restricciones migratorias norteamericanas.

La primera respuesta de la Revolución a esa política arbitraria y dañina fue habilitar, el 28 de septiembre de 1965, el puerto de Camarioca, al norte de la provincia de Matanzas, para que cualquier familia cubana residente en Estados Unidos, utilizando medios de transporte marítimos propios o contratados, pudiese recoger familiares que podrían emigrar mediante permiso previo de las autoridades cubanas. Como resultado entre octubre y noviembre de 1965 alrededor de mil embarcaciones procedentes de Estados Unidos, desacatando las órdenes de las autoridades norteamericanas, se reunieron en ese pequeño puerto y emigraron por esta vía cerca de 2 700 personas.

A pesar de que no existían siquiera relaciones diplomáticas ni oficinas de intereses, se realizaron negociaciones entre ambos países y se logró el 6 de diciembre de 1965 un memorando de acuerdo que estableció un puente aéreo desde Varadero hacia Estados Unidos, que se mantuvo funcionando desde enero de 1966 hasta abril de 1973. De forma ordenada y segura, alrededor de 260 mil personas en total pudieron satisfacer sus deseos de emigrar hacia Estados Unidos y decenas de miles de familias pudieron reunificarse.

Este constituyó además el primer acuerdo entre ambos gobiernos para organizar el flujo migratorio, denominado Memorándum de Entendimiento o de Acuerdo firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Cuba y la Embajada de Suiza en La Habana, como representante de los intereses del Gobierno de Estados Unidos, el que propició un puente aéreo por el que emigraron más de 268 000 personas.

La poca seriedad con que el gobierno de Estados Unidos acogió este acuerdo se evidencia en el hecho de que de las 160 mil visas que debieron ser concedidas en sus ocho años de vigencia, solo



fueron otorgadas 11 222, es decir, el siete por ciento, mientras continuaron alentando la emigración ilegal.

Las autoridades norteamericanas seleccionaban y procuraban extraer del país, cuanto fuese posible, médicos, enfermeras, profesores, maestros y otros profesionales universitarios o técnicos de nivel medio, los cuales percibirían allí los salarios correspondientes a esas calificaciones, en el país más desarrollado y rico del mundo. Incomparablemente mayores que los de una neocolonia recién independizada y a la vez subdesarrollada, pobre y rigurosamente bloqueada por el poderoso país con el cual mantenía desde principios de siglo los más importantes vínculos económicos, financieros y comerciales.

El 2 de noviembre de 1966, que estableció status especiales y exclusivos para "cualquier extranjero nativo" (de Cuba) "o ciudadano cubano o que haya sido inspeccionado y admitido o puesto bajo palabra (parolee) en Estados Unidos después del primero de enero de 1959, y que haya estado presente físicamente en Estados Unidos al menos durante un año, puede ser ajustado por el Fiscal General, como extranjero admitido legalmente para residir permanentemente. Las disposiciones de esta Acta serán aplicables al cónyuge, e hijo de este extranjero.

De esta forma se le concedió la oportunidad a los cubanos que en su mayoría llegaban a ese país de forma ilegal, de obtener la residencia permanente en un corto período de tiempo sin tener que salir de Estados Unidos al concederle asilo político de forma casi automática, y eximiéndole de requisitos previstos el Acta de Inmigración y de Nacionalidad aprobada el 3 de octubre de 1965 y vigente para otros inmigrantes.

La aprobación y puesta en práctica de esta Ley única en el mundo, fue utilizada como un arma para desestabilizar y destruir el proceso revolucionario cubano, al tener un contenido con un carácter político, aunque resultó muy general y confuso. Las concesiones relacionadas con el estatus especiales dadas a cuanto ciudadano saliera ilegalmente de Cuba tan pronto pisara tierra norteamericana, fue algo que no se concedió jamás a ningún otro país del mundo. De haberlo hecho así con el resto de América Latina y el Caribe, hoy habría muchos más ciudadanos latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos que los nacidos en ese país.

La Ley de Ajuste Cubano se ha mantenido inconvencible sin justificación alguna, e incluso nuevos estímulos fueron añadidos a la misma. A partir de la misma surgió después el odioso tráfico de migrantes a través de lanchas rápidas, que procedentes de la Florida arribaban a cualquier punto de nuestras costas. Cuba sanciona con severidad tales hechos, mientras las administraciones de Estados Unidos, por razones políticas asociadas con el estado de la Florida, se cruzan de brazos.

En 1973 fue cerrado el puente aéreo llevando la cuestión migratoria entre las dos partes nuevamente al estado que tenían en 1965, para entonces ya existía una emigración asentada en el sur de la Florida.



En tales circunstancias, se produjo en 1980 una nueva crisis migratoria al crearse una situación similar a la de Camarioca, esta vez en el puerto de Mariel cuando 125 000 personas salieron a través de este puerto.

A raíz de los diversos compromisos contraídos por Cuba y Estados Unidos, se reconoció el interés común de impedir las salidas riesgosas desde Cuba que ponen en peligro las vidas humanas, y precisamente el objetivo era que Estados Unidos discontinuara su práctica de otorgar la admisión provisional a todos los emigrantes cubanos que lleguen a su territorio por vías irregulares y Cuba tomaría medidas efectivas, para impedir las salidas inseguras usando fundamentalmente métodos persuasivos.

Con relación al tráfico de inmigrantes Estados Unidos se comprometió a cooperar para realizar acciones oportunas y efectivas para impedir el transporte ilícito de personas hacia ese país, así como a tomar medidas efectivas para oponerse e impedir el uso de la violencia por parte de cualquier individuo que intente llegar o llegue a ese país desde Cuba mediante el desvío forzoso de aeronaves o embarcaciones, sin embargo nunca llegó a poner en práctica lo acordado y por el contrario continuó favoreciendo la entrada ilegal de ciudadanos cubanos a ese país provocando la acentuación de las salidas ilegales.

El 14 de diciembre de 1984, mediante negociaciones entre representantes de los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos se firmó el Acuerdo de Normalización de las Relaciones Migratorias entre ambos países, que contempló un Comunicado Conjunto y un Acta de Ejecución mediante los que Cuba aceptó la devolución de 2 746 excluibles que vivían en Estados Unidos y este se comprometió a permitir la entrada anual de hasta 20 000 ciudadanos cubanos que quisieran emigrar legalmente a ese país, en especial a familiares inmediatos de ciudadanos norteamericanos y de cubanos residentes permanentes en Estados Unidos.

La parte norteamericana expresó su disposición de poner en práctica con la cooperación de las autoridades cubanas, todas las medidas necesarias para asegurar que los ciudadanos cubanos residentes en Cuba que deseen emigrar a Estados Unidos y calificaran conforme a las leyes norteamericanas para recibir visa de inmigrante. El acuerdo incluía además 3 mil visas anuales para "aquellas personas que, habiendo sido puestas en libertad luego de cumplir sanción por actividades que la legislación penal de Cuba califica como 'Delitos contra la Seguridad del Estado', deseaban residir permanentemente en los Estados Unidos".

Del número total de visas que debieron ser concedidas por la cuota de hasta 20 mil por año, que debió sumar 160 mil, desde que se firmó el acuerdo, o sea, durante los 8 años, descontando los dos en que estuvo suspendido, sólo fueron concedidas 11.222, es decir, 14,3 veces menos que lo estipulado.

Entre 1991 y julio de 1994 cuando se desató la denominada crisis de los balseros, Estados Unidos recibió 13 275 inmigrantes ilegales cubanos, mientras solo aceptaba 3794 solicitudes de entrada legal. El incumplimiento reiterado de las visas prometidas, la Ley de Ajuste Cubano, el endurecimiento del bloqueo, y la propaganda subversiva procedente de Estados Unidos, estimulando la indisciplina social

y las salidas ilegales del país, junto a la falta de medidas eficaces por parte del gobierno estadounidense para evitar la emigración ilegal y eliminar el contrabando de personas, fueron la causa fundamental de esta grave crisis migratoria.

En este período, a pesar de la falta total de cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos, las autoridades cubanas lograron impedir la salida de 3 emigrantes ilegales por cada 4 que trataban de hacerlo, lo que demuestra la seriedad con que Cuba asumió la cooperación para normalizar el flujo migratorio. A pesar de ese esfuerzo unilateral de Cuba, en el primer semestre de 1994, arribaron ilegalmente a Estados Unidos 7,5 veces más emigrantes cubanos que las 544 visas concedidas de la cuota de hasta 20 mil por año que debía conceder Estados Unidos en virtud del acuerdo concertado, para viajar legalmente.

A pesar de los acuerdos migratorios firmados entre Cuba y Estados Unidos en 1994, el gobierno de este país, movido por presiones y factores de carácter político interno, ha mantenido la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, estimulando de esta forma las salidas ilegales, al recibir sin exigencias ni requisito alguno, a aquellos que pisan tierra en sus costas o arriban por vía aérea, con documentos falsos, en violación de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países, la que además, es la causante directa de elevadas pérdidas de vidas humanas.

Meses antes de tomar posesión del cargo, ya había apoyado la Ley de Torricelli, congresista demócrata, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1992 y firmada por el Presidente Bush el 23 de octubre de ese año. Tiempo después, ya como Presidente, Clinton firmaría en presencia de los más connotados líderes de la Fundación Nacional Cubano-Americana y los más cercanos aliados de esta en el Congreso, la brutal Ley Helms-Burton, el 12 de marzo de 1996.

La impunidad total y los estímulos con los que se reciben a todas las personas que salen ilegalmente de Cuba, han propiciado hechos de violencia, empleo de armas, e incluso de asesinatos de humildes tripulantes o custodios para secuestrar embarcaciones.

En los últimos años las operaciones ilegales de tráfico de personas desde el territorio estadounidense se han incrementado y han ido ganando en complejidad, con la utilización de lanchas rápidas de matrícula norteamericana. Se ha comportado este fenómeno como una actividad delictiva organizada, que le reporta importantes ganancias a los que la practican, que ha llevado a nuestro país a adoptar medidas de índole legislativa, con la penalización a partir de marzo de 1999 del tráfico de personas y la captura de más de 100 traficantes residentes en Estados Unidos.

## **II.2 Regulación en Cuba del Tráfico Ilegal de Migrantes.**

El creciente incremento de las migraciones ilegales ha llevado a muchos países, entre ellos Cuba, a adoptar medidas legislativas para prevenir y combatir con mayor eficacia el tráfico ilícito de migrantes, que en la actualidad aparece vinculado a los grupos delictivos organizados, los que desarrollan sus actividades por aire, mar y tierra, poniendo en peligro la vida y la seguridad de las personas. Por ello se aprobó y puso en vigor la Ley No. 87 del 16 de febrero de 1999, modificativa del Código Penal (Ley 62 de 1987).

De esta forma quedaron regulados en el Código Penal Cubano en el Título XV los Delitos Contra El Normal Tráfico Migratorio, en el Capítulo I titulado Tráfico de Personas. Específicamente en el artículo 347 se sanciona el que, sin estar legalmente facultado, organice o promueva, con ánimo de lucro, la entrada en el territorio nacional de personas con la finalidad de que estas emigren a terceros países a una sanción de siete a quince años de privación de libertad y en su apartado 2 sanciona con igual sanción al que sin estar legalmente facultado, organice o promueva, con ánimo de lucro, la salida del territorio nacional de personas que se encuentren en él con destino a terceros países.

En el artículo 348 se sanciona con privación de libertad de diez a veinte años al que penetre en el territorio nacional utilizando nave o aeronave u otro medio de transporte, con la finalidad de realizar la salida ilegal de personas. En su apartado 2 el marco sancionador se aumenta de veinte a treinta años o privación perpetua de libertad, para los casos en que el hecho se efectúe portando el comisor un arma u otro instrumento idóneo para la agresión, si en la comisión del hecho se emplea violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, si pone en peligro la vida de las personas o resultan lesiones graves o la muerte de estas o si entre las personas que se transportan se encuentra alguna que sea menor de catorce años de edad.

El bien jurídico protegido es el normal desarrollo del tráfico migratorio y la protección de los derechos de las personas que son objetos de tráfico ilícito de migrantes, que dada la complejidad y las formas de comisión de este delito están necesitadas de una especial protección por parte del Estado a través de los mecanismos del derecho penal.

El tipo penal se configura con la realización de los verbos rectores organizar y promover actos de entrada o salida del territorio nacional con la finalidad de emigrar, con lo cual se logra la punibilidad de conductas que de otra manera no pudieran penalizarse por no ser típicas. Por otro lado el ánimo de lucro forma parte del elemento normativo del delito, pues ello está íntimamente ligado al concepto de tráfico o comercio en el que es imprescindible el beneficio económico o de cualquier clase, pero que representa en sí un provecho para el sujeto activo.

El sujeto activo tiene un carácter general, ya que puede ser cometido por cualquier persona pero sin estar legalmente facultado para ello y con ánimo de lucro. El precepto en su apartado 2 señala que la salida para la emigración se realiza del territorio nacional con destino a terceros países, de lo que se presume la necesidad del tránsito por otro país, y precisamente esto significa que cuando los actos de promoción y organización se realicen con un destino directo, no se integraría la conducta preceptuada. Con relación a esta interpretación teórica se requiere analizar la posible revisión en la redacción de este particular por el legislador.

Los actos de esta naturaleza que generalmente ocurren en nuestro país tienen por destino Estados Unidos, y aunque en algunas ocasiones como forma de ejecución se utiliza un segundo país distinto al que se desea emigrar, en la mayoría de los casos la actividad se realiza de manera bilateral.

Conforme a lo que se ha referido anteriormente, el elemento subjetivo se caracteriza por el ánimo de lucro que manifiesta una conducta dolosa, requiriendo además el conocimiento de la acción que se realiza que tiene un fin determinado.

La figura prevista en el artículo 348 está conformada por un sujeto general caracterizado por la conducta que provoca penetrar en el territorio nacional como elemento material del delito, utilizando nave o aeronave u otros medios de transporte, con la finalidad de realizar la salida ilegal de personas del territorio nacional. Es un delito de intención ulterior, en el que no es necesario que se logre el propósito para que se considere consumado.

Se ha logrado a raíz de la regulación y consecuente penalización del Tráfico Ilegal de Migrantes en Cuba, una disminución en el número de salidas ilegales del territorio, unido al apoyo de las autoridades facultadas para accionar en todos los casos lográndose con ello en parte el objetivo fundamental de nuestro país de combatir enérgicamente estas conductas criminales y proteger con ello miles de vidas humanas.

## CONCLUSIONES

El tráfico de personas es un delito que se ha incrementado en forma alarmante en los últimos años, debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados.

Los instrumentos jurídicos que se necesitan, existen, las legislaciones nacionales los han ido incorporando, en mayor o en menor medida. Lo que falta es la voluntad política de los gobernantes, que no en todos los casos dedican los recursos necesarios para prevenir y combatir este flagelo de la humanidad, y con frecuencia los destinados a estos fines son desviados o malgastados. De manera especial lo que más se necesita es la cooperación multilateral, en especial de los estados más desarrollados, para mitigar los factores que, como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas, existentes en muchos países, hacen a las personas, vulnerables al tráfico ilegal de seres humanos y especialmente a las mujeres y los niños.

En vez de permitir que la diversidad de la raza y la cultura se conviertan en un factor de limitación en el intercambio y desarrollo humano, hemos de reenfocar nuestro conocimiento, y ver en esta diversidad el potencial del enriquecimiento mutuo, y darnos cuenta de que es el intercambio entre las grandes tradiciones de la espiritualidad humana el que ofrece las mejores opciones para la pervivencia del espíritu humano en sí mismo.

## BIBLIOGRAFÍA

1. Colectivo de Autores, Derecho Penal Especial Tomo II, Editorial Félix Varela, Págs. 291-318.

2. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional publicada por la Unión Nacional de Jurista.
3. Creus, Carlos: Derecho Penal. Parte Especial, Editorial Astrea.
4. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Publicada por la Unión Nacional de Juristas de Cuba, La Habana, 2001.
5. Quirós Pires, Tomás S. y otros: Derecho Penal. Parte Especial. Tirant lo Blanch, 1996
6. Safaron, Eugenio Raúl: Derecho Penal. Parte General. Editorial Ediar, Buenos Aires, 2002.
7. Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, sobre la emigración ilegal promovida durante 40 años por Estados Unidos contra Cuba, en Matanzas, el 3 de agosto de 1999 publicado en EcuRed.

## LEGISLACIONES.

1. Ley 87 de 1999 Modificativa Del Código Penal.
2. Ley de Ajuste Cubano. Antecedentes y particularidades.
3. Código Penal Cubano Ley No 62 de 1987 actualizado. Colección Jurídica, Ministerio de Justicia, 1999.
4. Código Penal Español. Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. Editorial QUILES, 1996.
5. Instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos. Publicado por el Instituto de Derechos Humanos y la Comisión de la Unión Europea.
6. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional. Asamblea general de las Naciones Unidas, noviembre de 2000.

---

## TÍTULO: “EL TERRORISMO Y EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO. REPERCUSIÓN EN CUBA”



**AUTORAS: Esp. Yania Díaz Álvarez**  
**Vicefiscal Jefa Municipal Ciego de Ávila**



**Esp. Nerly Espinosa Rivero**  
**Fiscal Jefa Departamento Procesos Penales**  
**Ciego de Ávila**

## INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la sociedad ha sido víctima de uno de los peores flagelos: el terrorismo, que es un hecho expresivo de violencia que se le puede ver durante toda la historia (conquistas, guerras) con sus más variadas formas de expresión y crueldad. El terrorismo se constituye así tanto en el ámbito interno como en el mundial, como en una vía abierta a todo acto violento, degradante e

intimidatorio, y aplicado sin reserva o preocupación moral alguna. No es, por lo tanto, una práctica aislada, reciente ni desorganizada pero no por ello estructurado.

Los objetivos buscados por esta forma de "guerra" no convencional pueden tener fines políticos, religiosos, culturales y lisa llanamente la toma del poder por un medio totalmente ilícito. Por dichas causas, el mundo se ve sacudido diariamente con noticias, donde pierden la vida personas inocentes y totalmente ajena a esa "guerra" o intereses diversos.

Este fenómeno es una de las formas de violencia más difíciles de contener debido a que su campo de acción se extiende más allá de las regiones de conflicto. Es un fenómeno que se caracteriza por su violencia indiscriminada, involucrando a víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista; su impredecibilidad, actúa por sorpresa creando incertidumbre, infundiendo terror y paralizando la acción; su inmoralidad, produce sufrimiento innecesario, golpeando las áreas más vulnerables; ser indirecto, el blanco instrumento es usado para atraer la atención y para ejercer coerción sobre la audiencia o un blanco básico, a través del efecto multiplicador de los medios de comunicación masivos. A los actos terroristas debe responderse por medio de normas jurídicas que contemplen su prevención y sanción.

La incertidumbre política existente durante las décadas de 1920 y 1930 dio pie a frecuentes actividades terroristas. El terrorismo tendió a integrarse dentro del conflicto más amplio de la II Guerra Mundial. Fue centrando pautas hasta que en nuestros días se ha convertido en un peligroso flagelo universal, que solapado con los intereses de un mundo globalizado pone en peligro la existencia humana.

## **DESARROLLO**

El terrorismo ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia. Las sociedades secretas detectadas en algunas culturas tribales mantenían su influencia valiéndose del terror.

En años recientes el terrorismo ha multiplicado su centro en los Estados Unidos; siendo tratado principalmente como un tema internacional y de política exterior; desarrollando su percepción por los ataques del 11 de Septiembre de 2001.

La humanidad vive un momento particularmente crítico de su historia. La guerra, con todas sus secuelas de destrucción y muerte, es la respuesta a los atentados terroristas desarrollados en esa fecha, por el gobierno imperialista.

En la actualidad se utiliza marcadamente por EE.UU., la formación de grupos opositores al gobierno que deseen ellos intervenir y de esta manera crean una situación en ese país de inestabilidad política y de terror; esta forma que asiduamente se está utilizando por esta potencia imperialista tiene sus más allegados aliados con la Unión Europea, marcando sus miras en los países Árabes, por concretos intereses económico o contra cualquier país que se opongan a sus intereses como son los del ALBA.

Resulta ya cotidiano leer en la prensa o ver en otro medio audio visual la violencia ejercida por los llamados grupos de oposición avalando supuestos intereses; nótese así las noticias acerca de los altercados violentos en Paquistán, donde en varios puntos de este País existen altercados entre la milicia talibán y progubernamentales y medios militares; resultando víctimas en la mayoría de las ocasiones, milicianos por aviones de combate paquistaníes.<sup>1</sup>

Otro relevante ejemplo y de actualidad lo constituye la escalada de violencia Israelí contra Gaza, la situación inestable de Libia, al darle muerte a su presidente Gadaffi, la violencia en Siria, esta última donde el presidente Bashar Al Assad, se reunió el once de marzo del presente año dos mil doce con el emisario de la ONU y la liga Árabe, Kofi Annan, en segunda oportunidad, para encontrar una salida que ponga fin a la crisis social en el País Árabe; donde fue confirmado por su presidente que existen grupos terroristas que actúan para sembrar el caos y la desestabilización, al atacar a civiles y militares<sup>2</sup>.

De igual forma ha resultado público como EE.UU. entrenó a un grupo terrorista iraní en Nevada, que bajo las siglas JSOC, nombrados como comando de operaciones especiales conjuntas, adiestró a la organización de los Muyahidines del pueblo Iraní en el dos mil cinco, a pesar de que es considerada como organización terrorista por el departamento de Estado, teniendo como objetivo intervenir comunicaciones, criptografía, manejo de armas y tácticas de unidades pequeñas, participando los mismos en el asesinato de cinco científicos nucleares iraníes<sup>3</sup>.

De especial interés resulta el cinismo con que EE.UU., exige también a la oposición venezolana desmantelar la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), agrupando quince formaciones opositoras al gobierno del presidente Hugo Chávez, las cuales poseen entre sus principales misiones de ganar los comicios; la aplicación de un embargo petrolero total a Cuba y el fin de la cooperación con nuestro País<sup>4</sup>.

Y es que esta practica tiene trascendencia en la historia, si recordamos como los países integrantes de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), con su principal integrante EE.UU., ha financiado grupos opositores para crear desorden y terror en el mundo, ya en el año dos mil nueve, respondiendo a una pregunta acerca de si se disculparía por el papel de la CIA en el golpe de Estado de 1973 en Chile, Obama; refirió que le interesaba ir hacia delante sin mirar hacia atrás; sin embargo y compartiendo el análisis que al respecto realizara un editor de la Publicación digital UpsideDownWorld.org; para que la historia no se repita se debe reflexionar sobre el asunto y mirar hacia atrás en la historia para que la justicia pueda avanzar hacia adelante<sup>5</sup>.

Ante una situación de mal social, se debe responder jurídicamente como corresponde, por lo que la lucha contra el terrorismo en modo alguno puede permitirse quebrantar los principios y garantías

---

<sup>1</sup> Periódico Granma, Internacionales, pág. 4; Marzo 12 del 2012

<sup>2</sup> Ibídem.

<sup>3</sup> Periódico Granma, pág. 1; Abril 7 del 2012

<sup>4</sup> Periódico Granma, Internacionales, pág. 4; Marzo 12 del 2012.

<sup>5</sup> Artículo, Elliott Abrams Dark, History in Latin American; Cyril Mychalejko.

conquistadas por el Derecho Penal, su ofensiva debe de realizarse desde los marcos del Estado de Derecho y ello conlleva a tener en cuenta los fundamentos de la doctrina del Derecho Penal.

## MOTIVOS DEL TERRORISMO

Diversos motivos inspiran a los terroristas. Los estudiosos del terrorismo los clasifican en tres categorías: racional, psicológico, y cultural. Un terrorista puede ser formado por combinaciones de éstos.

## TIPOS DE TERRORISMO

Podemos encontrar tres tipos importantes de terrorismo<sup>6</sup>:

### NARCO-TERRORISMO.

Se llama de esta manera a la utilización del tráfico de drogas para promover los objetivos de ciertos gobiernos y organizaciones terroristas. El narco-terrorismo atenta contra los derechos humanos esenciales como el derecho a la vida y a la integridad física; a la tranquilidad y a la honra; a la participación política y a la libertad de expresión y comunicación, para mencionar solamente los más vulnerados.

TERRORISMO NUCLEAR. Este tipo de terrorismo será uno de los más preocupantes en los próximos años.

Evitar el tráfico ilegal de material radiactivo es muy importante porque a las sustancias con que se trafica se les puede dar uso militar o terrorista y porque también puede producir un desastre sanitario.

Otros blancos probables de futuros atentados terroristas son las centrales nucleares.

Es en este sentido que en la actualidad se desarrollan protestas antinucleares; siendo un ejemplo de ello la desarrollada en Berlín el once de marzo del presente año dos mil doce, donde más de veinte mil personas fueron convocadas con motivo del primer aniversario de la catástrofe en la central atómica japonesa de Fukushima, donde los manifestantes exigieron un mayor uso de la energía renovable y un replanteamiento en la gestión de los residuos radiactivos<sup>7</sup>.

### TERRORISMO DE ESTADO.

Es el uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la población. Por su naturaleza es difícil de identificar, y los conceptos varían en función del carácter de las épocas históricas, zonas geográficas y características culturales, aunque se le vincula a la formación de grupos de oposición.

---

<sup>6</sup> Terrorismo 1.htm.

<sup>7</sup> Periódico Granma, Internacionales, pág. 4; Marzo 12 del 2012.



## EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO. Y EL TERRORISMO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL.

Con la creciente tasa de criminalidad, muy asociada al fenómeno del terrorismo, los estudiosos del tema que hoy nos ocupa nos ofrecen desde el sector político una serie de reformas al Código Penal y a institutos procesales y penitenciarios; por lo que publicitan una nueva Ley denominándola como salvadora de todos los males sociales, trabajando sobre el efecto del delito y no sobre su causa.

Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, ha sido Gunther Jakobs quien introdujo el debate acerca de otro Derecho Penal; basado en que el terrorismo es una de las bases sobre la cual se ha reformulado el Derecho Penal del enemigo; siendo en sí los terroristas los enemigos por antonomasia. De esta manera surgieron en los últimos años una serie de legislaciones antiterroristas, que suspenden derechos de los sujetos considerados como sospechosos; no obstante ninguna de ellas ha resultado capaz de definir lo que se entiende por terrorismo.

Existe un paralelo con las dicotomías Garantismo y Mano dura, como modelos de actuación penal; pareciera que la lucha contra el crimen organizado sea terrorismo, narcotráfico y mafia son incompatibles con las garantías penales. Lo que en principio resulta falso y que las discusiones teóricas sobre la criminalidad no deberían correr por caminos dificultosos; sino plantearse el por que esta es funcional al sistema y el por que la criminalidad organizada es incentivada y protegida por Estados Unidos.

El Derecho Penal del enemigo, no solo posee su formulación en el derecho material o sustantivo sino también se esboza desde el Derecho Procesal Penal y es en este aspecto que Jacobs advierte: al igual que el Derecho Penal del enemigo sustantivo, también en este ámbito lo que sucede es que estas medidas no tienen lugar fuera del Derecho, pero los imputados en la medida en que intervienen en su ámbito, son excluidos de sus derechos.

Es en este sentido que también se le conoce como tercera vía, como refiere Silva Sánchez<sup>8</sup>. Esta concepción se encuentra enmarcada para los casos de criminalidad organizada consistente en la defensa de un estado frente a un tipo de ataque, diferente que puede surgir desde la criminalidad común, asimilándolos a un estado de excepción (Guerra-Terrorismo-Narcotráfico) y que intenta legitimar y justificar la estructura de un derecho penal y procesal sin garantías.

En el plano de las relaciones internacionales se aplica su uso con la pretensión de convalidar la tesis de la guerra preventiva abierta desatada, luego del 11 de septiembre del 2001, por el imperio americano conformado como superpotencia militar, tecnológica y económica que domina el escenario de la globalización de los comienzos del nuevo milenio, contra el que pueda poner en riesgo su hegemonía.

Lo que más llama la atención de estas políticas criminales es que poseen el aval de prestigiosos intelectuales que posibilitan su marco teórico; siendo una importante posición para el derecho

---

<sup>8</sup> Fabián L. Riquert<sup>1</sup> y Leonardo P. Palacios, El Derecho Penal del Enemigo o las excepciones permanentes, en la Ley, Revista Universitaria, Año V, Nro 3, Junio de 2003, p.1-8.

continental la teoría funcionalista de Jacobs la que posee como características fundamentales: 1) de un lado, un amplio adelantamiento de la punibilidad, es decir cambio de perspectiva del hecho producido por el hecho que se va a producir; 2) la falta de reducción de la pena proporcional a dicho adelantamiento; 3) paso de la legislación de Derecho Penal a legislación de lucha para combatir la delincuencia, en concreto la económica; y 4) la supresión de garantías procesales, donde la incomunicación del procesado constituye un ejemplo clásico.

Existe una estrecha relación con los derechos contractuales con los del enemigo, partiendo de que su relación más polémica parte del trato al ciudadano o no ciudadano o persona, categorías que son utilizadas para definir al participante, así quien forma parte de una vaga organización criminal no es persona y por resultado no merece que se le respete los derechos individuales, o sea no merece ni justicia. Quedó fuera de la sociedad y tal como en el contrato hobbesiano, quien esta afuera no es persona, y no merece que se le respete en esa calidad. Incompatiblemente quedó fuera de una normativa que no consintió (El famoso pacto en Hobbes; quien consiente las normas o solo delinque en forma normal en la teoría del Derecho Penal del enemigo).

De esta forma el enfrentamiento a los problemas sociales con mayor grado de auge dieron lugar a discursos de emergencias, que hicieron nacer o resucitar las mismas instituciones represivas a las que en cada ola emergente se apela, y que no varían desde el siglo doce hasta la actualidad, ejemplo del tratamiento al enemigo, al extranjero, al que está fuera del contrato lo podemos observar en la: Orden del Presidente de EE.UU. del trece de noviembre del dos mil uno que permite la instauración de tribunales militares secretos que se ocupan de juzgar a no-ciudadanos acusados de terrorismo, pudiendo desplazarse al lugar del no-nacional para juzgarlo. Muy similar a lo planteado por Zaffaroni, con su Derecho Penal Simbólico<sup>9</sup>.

En la actualidad se pueden advertir varias legislaciones que hacen referencia a este tipo de derecho, nótese como lo expresa Portilla Contreras, como lo son la Italiana y francesa, así como la legislación británica en esta materia que pesa en un torno de terrorismo internacional ampliado y la concesión de poderes desorbitados a la policía; evidenciándose la creciente legislación de excepción enmarcada dentro de la construcción teórica.

Partiendo del respeto a la doctrina del Derecho Penal, se traza la necesidad de que las conductas recogidas dentro del ámbito del terrorismo estén recogidas en los cuerpos penales, debidamente tipificadas en todas sus variantes; prestándose especial atención a las formas de organización criminal con esta finalidad y a la financiación del terrorismo.

No existe un criterio general a si debe estar codificado o en leyes especiales y coincidiendo con lo planteado por la Dra. Mayda Goite Pierre; “confío toda seguridad a los tipos penales establecidos en los Códigos, pero no dejo de reconocer que fenómenos de esta naturaleza por las particularidades propias de su enfrentamiento pueden ser objetos de leyes especiales, siempre que las mismas no se

---

<sup>9</sup> José Luis, El Derecho Penal Simbólico y los efectos de las penas, No 1, 2001, pp 1-22.

aparten en su concepción de los principios y filosofía que establecen los Códigos Penales de cada lugar y sirvan para ratificar la autonomía de estas conductas”<sup>10</sup>.

El delito de Terrorismo es una clara conducta pluriofensiva, es por ello que preexiste una cierta confusión en la doctrina al no existir unanimidad en su ubicación, pues algunos ubican su bien jurídico en la seguridad colectiva al considerar que pone en riesgo la adecuada observancia de las reglas de convivencia en la sociedad y otros por su parte consideran que la protección de los ciudadanos en su integridad física, sus bienes y estabilidad social, amerita que el bien jurídico protegido este relacionado con la seguridad nacional; este último concepto si bien es certero ofrece una amplitud mayor a la protección, también; la extensión de su interpretación ha posibilitado en su nombre cometer excesos de su aplicación.

Esta modalidad delictiva, tiene una sustantividad criminológica propia por tener en cuenta determinadas características específicas de la criminalidad organizada, a motivaciones de la conducta y a fines subjetivos del autor.

Así es que los elementos de estas conductas pueden observarse afines con las conductas que se prevén en la doctrina para tipificar los bienes jurídicos que son objetos de protección, al encontrarnos ante una escala de acciones y omisiones, por el propio carácter pluriofensivo del delito como figura en general, que van desde estragos, incendios, lesiones, muertes, daños y otras conductas.

De esta forma su elemento subjetivo va a motivarse por un dolo específico, caracterizado de manera muy definida, que deben preverse con precaución para no deformar el contenido principal de la formulación típica, dada en ser una violencia que tiene como objetivo crear terror, así sea en un sector de la población para cambiar el sistema socio económico o político en general, a pesar de que en la actualidad no podemos pasar por alto la vinculación de esta modalidad delictiva con el crimen organizado y el financiamiento a ciertas conductas que no siempre poseen los fines antes señalados. Por lo que es un delito cuyo resultado puede ser de daño o de peligro, abstracto o concreto.

#### TERRORISMO CONTRA EL PUEBLO CUBANO. SU REGULACIÓN ACTUAL.

La victoria revolucionaria en Cuba constituyó para EEUU una de las más humillantes derrotas políticas en su existencia como gran potencia imperialista. La guerra desatada contra Cuba ha quedado históricamente demostrada, acciones políticas, militares, económicas, biológicas, diplomáticas, psicológicas, propagandísticas, de espionaje, la ejecución de actos terroristas y de sabotaje, la organización y apoyo logístico a bandas armadas y grupos mercenarios clandestinos, el aliento a la desertión y emigración y los intentos de liquidar físicamente a los líderes del proceso revolucionario cubano.

Todas estas acciones hostiles y agresivas ejecutadas contra Cuba desde el mismo triunfo de la revolución hasta el presente, han causado enormes pérdidas materiales y humanas al pueblo, así como incalculable sufrimiento a los ciudadanos cubanos.

---

<sup>10</sup> Dra. Coite Pierre Mayda; En busca de un concepto jurídico penal de terrorismo. En contra del Derecho Penal del Enemigo.

Todos estos actos terroristas contra el pueblo cubano, los cuales existen todavía, tienen sus raíces en el "exilio" Cubano y la CIA.

Conocer la larga historia de cincuenta y cuatro años de la Revolución Cubana, en la que nuestro país ha sido víctima de innumerables actos terroristas en suelo cubano y fuera de éste, que han traído la muerte de más de 3 000 seres humanos inocentes, ayuda a comprender por qué debe considerarse como legítima defensa la actuación de Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón y René, alejados de su familia y seres más queridos, dispuestos a postergar el disfrute de la convivencia diaria con su pueblo, en función del cumplimiento consciente de su deber.

Cuando en la segunda mitad de la década del 60 se desmantela en Miami el enorme consorcio del terror que había instalado la CIA, bajo el nombre de código JM/WAVE, También fue liberada de sus tareas una enorme cantidad de personajes, preparados para la guerra sucia y a quienes, incluso, se les vendió a precio de socios todo un arsenal de medios para librarlas<sup>11</sup>.

Es por ello que de 1960 a 1967, esa infernal maquinaria empleo a 250 oficiales y a más de 2000 agentes cubanos con un presupuesto de cientos de millones de dólares, en un inútil y fracasado intento por destruir a la revolución cubana.

A partir de 1962, bajo la dirección de Theodore Shackley, "El fantasma rubio", se desarrolla contra Cuba un sinnúmero de operaciones de sabotajes, atentados y conspiraciones. Con este propósito se crearon decenas de empresas fantasmas: Turoperadores, inmobiliarias y se entrenaron en el uso de técnicas de terrorismo a cientos de individuos. En esa operación participaron también experimentados mercenarios tales como Luís Posada Carriles, Félix Ismael Rodríguez Mendigutia, quien ordenó el asesinato del Che, Guillermo e Ignacio Novo Sampoll.

A partir de ese desmantelamiento, numerosos personajes de origen cubano, licenciados por JM/WAVE, reaparecieron, por cierto, en numerosas acciones no tan autónomas contra cuba. Sin embargo, esos mismos individuos usaron constantemente al llamado anticastrismo como pretexto para toda una serie de actividades terrorista.

El terrorismo como instrumento contra Cuba tenía su carta de intención firmada y acuñada en Washington, desde el 17 de Marzo de 1960. El programa de acción encubierta aprobado por el presidente Eisenhower y continuado luego por los gobiernos de turno, precisaba: -que el método para lograr ese fin consistirá en incitar, apoyar y , en lo posible, dirigir la acción, dentro y fuera de Cuba, por parte de grupos selectos de cubanos que pudieran realizar cualquier misión por iniciativa propia. De esta manera se originaron varios grupos para realizar acciones terroristas en nuestro país como fueron Alpha 66, Omega 7, Abdala, quienes apoyados por la Fundación Cubano Americana, por la Freedom House Foundation, entre otras, de características extremistas fundamentalistas, desarrollaron actividades que tuvieron etapas de marcada intensidad.

---

<sup>11</sup> Periódico, Juventud Rebelde, Marzo doce del 2006.

La demanda del pueblo cubano señala que solo en 14 meses (noviembre 1961/enero 1963), desde que Kennedy puso en marcha el –Proyecto Cuba-, se efectuaron 5780 acciones terroristas contra nuestro país, de ellas 716 sabotajes de envergadura contra instalaciones Industriales .Entre los años 1971-1973 irrumpieron en nuestro país lanchas rápidas y potente armamento, para ametrallar, intimidar, perseguir y hundir embarcaciones, asesinar y humillar sin contemplaciones, llevando el luto a familias de trabajadores y combatientes tales como fue el hecho ocurrido el 4 de Octubre de 1973 cuando tripulantes de las embarcaciones 034 y 17 de la flota cubana, fueron sorprendidos por el fuego rápido y circular de calibre 30, desde lanchas piratas, en las aguas internacionales de las Bahamas. De esta manera se sucedieron una serie de hechos que conmovieron a la población cubana como lo fue el sabotaje al avión de Cubana de Aviación frente a las costas de Barbados el 6 de octubre de 1976, donde perdieron la vida 73 personas siendo su principal cómplice la CIA , de igual manera que ocurrió con la inserción de ciudadanos de otros países para efectuar actos terroristas en Cuba como lo fue el Salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena quien el 4 de Agosto de 1997 hizo estallar una bomba en el hotel Meliá Cohíba, y el 10 de Junio de 1998 fue capturado cuando trataba de introducir al país 1519 gramos de explosivos además de detonadores y otros medios técnicos, lo cual estaba claramente destinado para hacerla explotar en el memorial del Che, en Santa Clara , en la plaza Antonio Maceo en Santiago de Cuba y en el Museo de la Revolución en la Habana, de igual manera que ocurrió con el terrorista Cruz León , quien en fecha 4 de septiembre de 1997 colocó una bomba en el Lobby-Bar del Hotel Copacabana provocando la muerte del ciudadano de nacionalidad Italiana Fabio Di-Celmo<sup>12</sup>.

Acciones que se intensificaron por parte del gobierno de EEUU con la promulgación de varias leyes para incrementar el bloqueo a nuestro país como la Ley Torricelli, Helms Burton, así como la estimulación de salidas ilegales del país , y entradas de terroristas bajo la apariencia de turistas con el fin de solventar grupúsculos contrarrevolucionarios.

En la década del noventa, nuestro País se convirtió en escenario de múltiples actos terroristas, la impunidad de estos terroristas funcionaba como pasaporte hasta nuestra Isla, demostrándose el financiamiento del gobierno de EE.UU. con infiltraciones de medios y técnicas para ser utilizada contra nuestro país, siendo juzgado Ernesto Cruz León, quien evidencio las maniobras utilizadas; comenzó entonces a pisar fuerte la justicia contra los agentes capturados y el terrorismo maquilló su rostro de manera diferente.

Eran tiempos en que la Ley de Ajuste cubano lanzó al mundo fotografías donde el rostro de un niño se impactaba a causa del terror del gobierno de los EE.UU. que ahora pavoneaba de derecho, unión de familia y auto elección. Elián González zozobró en las costas de la florida para demostrar al mundo cuanto puede hacer el imperio del norte con el acoso, manipulaciones y laceraciones a la inocencia.

En el año 1998, al ser detenidos en La Florida, cubanos acusados por terrorismo; la CNN publicó que le fue concedida una entrevista con nuestro líder histórico Fidel Castro, el que refirió que: “A partir de experiencias como el mismo secuestro de aviones, que se inventó contra Cuba y que después se utilizó contra ellos porque hay gente loca, desquiciada, desequilibrada, fanáticos en el mundo capaces de hacer todas esas cosas, y muchos aviones los secuestraban con una botella de agua, diciendo que

---

<sup>12</sup> Periódico Granma, Mayo seis, del 2000.

era gasolina; pero como el piloto, y de una manera correcta, tiene que velar por la seguridad de los pasajeros, no se puede poner a adivinar o a averiguar si es agua o gasolina, unas veces puede ser agua y una vez de cada diez ser gasolina y haber una catástrofe, personas que se opongan a eso, que denuncien eso, que estén en desacuerdo, a mi juicio, son personas honorables, y estoy seguro de que Estados Unidos no llamaría jamás traidor a ningún ciudadano de cualquier país que brindara información sobre actos de terrorismo que se preparen contra Estados Unidos o contra embajadas de Estados Unidos, o que puedan costar vidas de norteamericanos. ¡Jamás los llamaría traidores! ¿Por qué llamar traidores a cualquier persona que brindara información al país que puede ser víctima de actos terroristas?”<sup>13</sup>.

Lo que se publicaría en ese momento sería de valor trascendental, pues comenzaría para nuestro pueblo la incansable lucha por la liberación de nuestros cinco héroes que fueron injustamente condenados.

En los momentos actuales, el gobierno de EE.UU.; continúa desarrollando múltiples actos para tratar de doblegar a nuestro País a sus intereses. Incluso se propone por la ultraderecha de Miami, que para este año 2012, el congreso realice nuevas Leyes que aumenten el bloqueo contra Cuba. Es por todo lo antes referido que tuvimos que situarnos en una regulación especial para el delito de Terrorismo y que estuviera a tono con el peligroso avance de este flagelo.

En Cuba el Código Penal en la Sección séptima de los delitos contra la seguridad del Estado, libro segundo parte especial, poseía del artículo 106 al 109 al Terrorismo como un delito lo cual fue derogado por la disposición Final Segunda de la Ley número 93 del 20 de Diciembre del 2001, en el cual se da tratamiento a este flagelo.

En esta Ley especial, se recogen los principales pronunciamientos y recomendaciones que se han dictado en los principales instrumentos jurídicos internacionales aprobados por la comunidad internacional y si expresamente no se aporta un concepto de terrorismo en su artículo uno se refiere a que la Ley posee como centro prever y sancionar los actos descritos en su articulado que por la forma de ejecución, medios y métodos empleados, evidencia el propósito específico de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, por poner en peligro inminente o afectar la vida, o la integridad física o mental de las personas, bienes materiales de significativa consideración o importancia, la paz internacional o la seguridad del Estado Cubano<sup>14</sup>.

Tiene como características esencial el no definir de manera absoluta el terrorismo, pero expresa sus características fundamentales y se tipifican diferentes acciones que conforman las distintas conductas delictivas que pueden integrar actos de terrorismo y ratifican su carácter pluriofensivo y de dolo específico. Se promueve la cooperación internacional para la prevención, represión y erradicación del Terrorismo.

---

<sup>13</sup> Fidel-entrev.html HTML. Document 20 KB.

<sup>14</sup> Dra. Coite Pierre Mayda; En busca de un concepto jurídico penal de terrorismo. En contra del Derecho Penal del Enemigo.

Además, esta Ley tiene en cuenta los institutos generales del Derecho Penal válidos en el Código Penal, que se declara como una ley complementaria a esta. Se respetan en lo fundamental las escalas de sanciones previstas en el Código a fin de mantener la vigencia del principio de proporcionalidad como limitativo al derecho de castigar del Estado. Se introduce el embargo preventivo o la congelación de fondos y demás activos financieros o bienes y recursos provenientes de estas actividades o destinadas para las mismas.

De su lectura se advierten las elementales diferencias con las leyes del gobierno imperialista que para materia de terrorismo fue promulgada, teniendo en cuenta que la ley 93 busca una secuencia real y lógica de la necesidad de cooperación entre todos los países para eliminar o combatir el flagelo del terrorismo, que su verdadera esencia está bajo la falacia del gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo la Ley Contra el Terrorismo de EE.UU., la cual es formal en muchos aspectos, pues mientras abriga al terrorista más connotado en América y principales países del mundo, lleva el terror mediante las guerras al mundo y en su larga lista pone a un país como Cuba, plasma en su letra una lucha seria contra este flagelo, Ley que constituye una hipocresía y una forma legal de consumir sus crímenes.

La nueva ley de Estados Unidos contra el terrorismo en su articulado y de forma muy solapada, intensifica las restricciones a la exportación de material defensivo, las visas para extranjeros vinculados con el terrorismo, el derecho de aterrizaje en Estados Unidos para líneas aéreas y la recaudación de fondos y otro material en apoyo de grupos terroristas; cuando la realidad de este articulado ha demostrado ser otra.

Esta Ley, cuyo proyecto fue firmado por el senador Miguel Pichetto, el once de septiembre del dos mil dos, a un año de los atentados contra las torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington, intenta asignar un rol a las Fuerzas Armadas, tal como lo pretende el gobierno de EE.UU. y contiene graves restricciones a los derechos individuales garantizados constitucionalmente.

#### TERRORISMO CONTRA CINCO HÉROES.

Un fragmento significativo de la historia en el enfrentamiento al terrorismo internacional y nacional, lo constituye la lucha llevada a cabo por cinco ciudadanos, tres nacidos en Cuba y dos en Estados Unidos, que hoy se han honrado como los Cinco héroes cubanos sancionados injustamente en el Imperio, acusados principalmente de “Espías”, en Estados Unidos.

Desarrollándose un proceso judicial que en su primera fase que fue prolongado varios meses, se tejió una estrategia de silencio y máxime, cuando según ellos; se procesaban “espías”.

Evidentemente que no les era conveniente que saliera a la luz todo lo que alrededor del proceso se denunciaría, en relación a la situación del terrorismo en Estados Unidos y sus principales rectores.

Solo se limitó a ser divulgado en la prensa de Miami, teniendo el objetivo principal de influenciar a la población y de hecho al jurado. En el Herald de esta ciudad se publicaron más de ciento sesenta



artículos y cuarenta y seis de ellos los calificaron de “espías”, utilizaron el término de espionaje alrededor del proceso de selección del jurado, por muchos candidatos se vertieron valoraciones reflejando temor a formar parte del jurado, tener que dar un veredicto favorable a los acusados ante las reacciones de sectores contrarrevolucionarios en la población, las publicaciones en la prensa y cualquier otro tipo de medio.

Finalmente se seleccionó un jurado no imparcial y se consumó el acto inconstitucional de esta forma.

#### FALTÓ EL “DEBIDO PROCESO”. VINCULACIÓN CON EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO.

Si vamos a considerar en forma de síntesis el Debido Proceso, podríamos decir que es el proceso ajustado a las normas legales, es decir sin violación de lo que estipula la Ley, algo muy lejano de lo que constituyó el proceso contra los Cinco, por lo que sin dudas consideramos que posee elementos vinculantes con el llamado Derecho Penal del Enemigo; pues fue así el trato dado a nuestros Héroes, como si fuesen enemigos y por tanto sus derechos elementales serían vulnerados.

Múltiples hechos, actos jurídicos, violando normas procesales definieron el proceso que lo harían nulo al ser esgrimido cualquiera de ellos, algunos muy específico que determinaron un alto grado de indefensión desde el mismo momento de la detención, no se efectuaron las advertencias legales establecidas sobre sus derechos como acusados de declarar o no, de sus derechos de ser asistidos de abogados, siendo interrogados durante una o varias horas ininterrumpidamente.

Así es la determinación llevada a cabo bajo la Ley de Procedimiento de Información clasificada conocida por las siglas CIPA, Ley traída por las filas para obstaculizar la defensa. El resultado de su aplicación redundó en que los abogados de los Cinco héroes tuvieran solamente acceso al veinte por ciento de los documentos de la causa, por considerar el resto clasificados, sin haberse ocupado a los mismos ni un solo documento clasificado.

De igual forma con el objetivo de debilitarlos, para que confesaran lo que la acusación perseguía, desde los inicios estuvieron incomunicados en la unidad de albergamiento especial conocida por el hueco, siendo celdas en condiciones infrahumanas que constituyen una tortura, violando así la Constitución de ese País. En esas celdas se destinan aquellos procesados que cometen algunas indisciplinas graves. Pero no obstante ellos no se doblegaron, manteniendo su firmeza, como todo héroe.

El principio de la duda favorece al reo, todo lo que fue violado en este proceso, a contrario sensu, se enarbó en casos de dudas, en contra del reo prevaleciendo la “Justicia” Penal del imperio.

Como consecuencia de un proceso violatorio desde su principio evidentemente debían esperarse condenas injustas. Surgiendo de esta manera las condenas de espionajes sin evidencias, donde se demostró que enviaban para Cuba informaciones sobre grupos terroristas asentados en Miami, lo que no constituye ningún secreto de estado que pusieran en peligro la seguridad. La sanción por el delito de asesinato a unos de los acusados por el derribo de un avión que frecuentemente violaba el espacio



aéreo de nuestro País<sup>15</sup>, que fue advertido todas las veces a sus pilotos, lo cual fue una decisión del gobierno cubano, que ningún país extranjero tiene jurisdicción de juzgar estos hechos, que no se probó ningún elemento de dolo ni relación de causa y efecto entre el acusado y el derribo de este avión. En este caso no se respetó la doctrina del Acto de Estado, que prohíbe sustanciar resultados de acciones de otros países, con consecuencias en ciudadanos de Estados Unidos. Así el proceso se desarrolló excluyendo por los jueces, toda impresión a favor de los acusados.

El Amicus Curire o Amigo de la Curia, como figura clásica, fue desechado; presentándose dos como fue la del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos, el Proyecto Nacional de Jurados, así como el de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Esta institución en el Derecho de Estados Unidos, permite brindar opiniones que tiendan a contribuir, a la mejor administración de justicia.

Formulada la sentencia en primera instancia, apelada esta al tribunal de Atlanta, el gobierno trasladó las presiones de Miami, en su empeño de mantener amañado el proceso desde su inicio, como parte de sus intereses.

Al desarrollarse la vista de apelación el informe de la Fiscalía, se caracterizó por su carga política en las 57 páginas dedicadas supuestamente al enfoque jurídico.

Mientras que los acusados expusieron veinticuatro causales de apelación. Expectativa que transcurrió hasta que la edición del panel de tres jueces de Atlanta concluyera anular la sentencia, que el juicio debía celebrarse nuevamente en otra sede diferente, de donde se había celebrado en primera instancia.

Larga espera que culminó como era de pensar a favor de la impugnación que la Fiscalía estableciera contra esta decisión. Nuevamente la ignorancia y la injusticia prevalecieron en la justicia norteamericana.

El Tribunal formado por 12 jueces, por mayoría de 10, desaprobaron la decisión del panel de Atlanta, revocando la misma, volviendo la vigencia de la sentencia de primera instancia, considerando “legal” que el juicio se halla realizado en Miami, lo que representa una falta de total apego a la verdad y la justicia.

---

<sup>15</sup> En htm. Asesinato, se publicó un documento con el siguiente fragmento: En cuanto al derecho penal, la injusticia básica del jurado para arribar al veredicto de culpabilidad, fue personificar al Estado Cubano en la figura de Gerardo Hernández, y descargar sobre este todas las presiones de sectores extremistas de la comunidad de Miami, donde se celebró ilegalmente el proceso, ofrendando como favor político a estos sectores un inesperado y sorprendente veredicto de Culpable.

Sin embargo, la evidencia presentada en la Corte solo demuestra que Gerardo Hernández era una persona que informaba a Cuba sobre los planes de Hermanos Al Rescate, pero que nunca tuvo conocimiento concreto de que los aviones serían derribados el día 24 de Febrero de 1996, ni participó en la toma de esa decisión, ni en la ejecución de los hechos, ni dio información que sirviera para tales fines.

Pero ello no es el final, aunque es sabido que es una demostración de odio y venganza, se irá a la lucha por la solución, sobre los delitos imputados.

Sus aspectos fundamentales se ventilaron, como es la imputación del delito de asesinato, espionaje, así como la mala consideración de documentos clasificados.

Este proceso hasta el presente ha constituido un vejamen para la justicia norteamericana, los postulados de la Constitución han sufrido un significativo detonante, se refleja en el cumplimiento de diferentes enmiendas, como la No. 5 referida al debido proceso, la No. 6 referente al derecho de ser juzgado rápidamente y por un jurado imparcial, la No. 8 que induce la prohibición de infligir penas desusadas.

El efecto extensivo como principio del Derecho Penal, no fue tenido en cuenta, lo que se apreció en la Resentencia que fue realizada en el año dos mil nueve, donde se excluyó a Gerardo a quien se le mantuvo las dos cadenas perpetuas.

Pasajes que sin dudas posee elementos vinculantes con el Derecho Penal del Enemigo, si tenemos en cuenta la exclusión de todo Derecho Constitucional, que se a desarrollado en el caso de los cinco, siendo considerados como no personas y por ello su incomunicación real con sus familiares e incluso la injustificable libertad supervisada en la actualidad, a nuestro héroe René; tras el plazo establecido por la Jueza Federal del Distrito Sur de la Florida.

Como una nueva demostración de violación de sus derechos y tal como refiriera Ricardo Alarcón en la jornada de clausura del Quinto Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos frente a la Corrupción, en el mes de noviembre de 2011: que en un escenario de análisis del fenómeno de la corrupción e irrespeto a las leyes, cómo no hablar de un hecho que encierra todas esas miserias humanas; como lo es el injusto proceso contra los Cinco Héroes<sup>16</sup>.

Es por ello que resulta importante mantener nuestra infranqueable lucha contra el Terrorismo. Nuestro pueblo denuncia, combate este peligroso flagelo, porque tiene en sus manos la luz que defiende la obra de la Revolución.

## CONCLUSIONES

A través del presente trabajo pudimos constatar que el terrorismo no es tratado en todas las legislaciones como la norma jurídica y constitucional lo establece, cuestión aprovechada por el Gobierno de EE.UU. para desarrollar su falsa política.

Como Estados Unidos, ha querido legalizar sus acciones terroristas, a través del cinismo de una Ley, que condena la estancia de los terroristas en su país y abriga a los principales.

---

<sup>16</sup> Periódico Granma, Noviembre doce, del 2011.

Durante el análisis realizado, hemos conocido la normativa de la Ley Cubana contra el Terrorismo, fiel exponente de un país que verdaderamente condena y que es protagonista de la lucha contra este flagelo cada vez más extendido y que ha aumentado sus acciones cada vez más en el mundo.

La solución de los llamados males sociales actuales, no deben ser de las directrices de un Derecho Penal de dos o tres velocidades o de un Derecho Penal del Enemigo; sino de un trabajo amplio y preventivo observando las garantías constitucionales.

El proceso desarrollado contra nuestros cinco héroes es un vejamen a la justicia norteamericana y posee elementos vinculantes con la corriente del llamado derecho penal del enemigo.

### **BIBLIOGRAFÍA.**

Beccaria, Cesare, Tratado de los Delitos de las Penas, Trad. Juan A. De Las Casas, Di Plácido, Buenos Aires, 1998.

Diez Repolles, José Luís, El derecho penal simbólico y los efectos de la pena, Actualidad penal, N 1, 2001, Madrid.

Jakabs, Gunther- Cancio Melia, Manuel, Derecho Penal del enemigo, Thomson- Civitas, Madrid, 2003.

Siva Sánchez, Jesús Maria, La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Madrid, Civitas, 2da edición, 2001.

Zaffaroni, Eugenio R., El derecho penal liberal y sus enemigos, lectio Doctoralis, Universidad de Castilla-La Mancha, Enero, 2004.

Portillas Contreras, Guillermo; Derecho Penal y procesal del enemigo en España.

Libro Pusimos la Bomba ¿Y que? Autora: Alicia Herrera.

Fidel Castro, Cuba: Contra El Terrorismo y Contra La Guerra, Editora Política 2001.

Dr. Mayda Goite Pierre: En busca de un concepto jurídico de terrorismo y en contra del Derecho Penal del Enemigo.

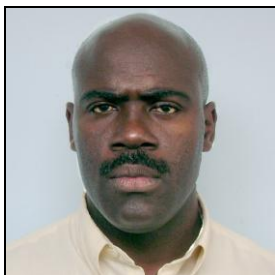
### **Otros Documentos:**

Periódico Juventud Rebelde	12/03/2006
Periódico Granma	01/06/1999
Periódico Granma	06/05/2000
Periódico Granma	12/08/1999
Periódico Granma	15/07/1999
Periódico Granma	12/08/1998

Periódico Granma	12/11/2011
Periódico Granma	12/03/2012
Periódico Granma	14/04/2012

---

## **TÍTULO: “LA FISCALÍA EN LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN CUBA”**



**AUTOR: Msc Reinaldo Cruz Rivera**  
**Fiscal Jefe provincial Pinar del Río**

### **INTRODUCCIÓN.**

En el enfrentamiento a la corrupción administrativa en Cuba participan entrelazadamente los medios de control social, en ese sentido al sistema de órganos de la Fiscalía General de la República, entre otras funciones, le ha correspondido la realización de varias tareas encaminadas a la reducción a niveles tolerables de ese fenómeno social negativo incompatible con los principios de justicia social y solidaridad humana que priman en una sociedad como la nuestra.

Al interior de la institución tanto en el ejercicio de la acción penal pública donde se ventilan conductas que pueden ser calificadas como corruptas, en la atención a las denuncias de la población por hechos de este tipo, en la tramitación de procesos confiscatorios por enriquecimiento indebido al amparo del Decreto Ley 149 de 1994, como en la ejecución de verificaciones fiscales e investigaciones, entre otras, se advierten las principales acciones que institucionalizan las acciones de prevención a los actos de corrupción administrativa en la Fiscalía General de la República.

Otros medios de control social intervienen en este combate, pero con carácter eminentemente profiláctico se identifican los medios de comunicación con su decisivo papel en la formación de una conciencia pública anticorrupción, reforzando valores relacionados con la buena gestión, la legalidad, la eficiencia y la moralidad.

El presente trabajo se trata, de manera sencilla, de transmitir algunas consideraciones resultantes de nuestra experiencia de trabajo en esta misión, exactamente relacionadas con las acciones de prevención a la indisciplina, el delito y la corrupción que realizan a través de las verificaciones fiscales e investigaciones que se ejecutan por nuestra institución.

Para ello nos apoyaremos en la Criminología, que como ciencia nos auxilia transdisciplinariamente a demostrar que una investigación puede resultar preventiva para evitar un fenómeno tan nocivo como la corrupción administrativa.

No es una exageración cuando se ha calificado este flagelo como un fenómeno que pone en peligro nuestra Seguridad Nacional, porque debilita las potencialidades de la nación desde ámbito económico hasta el ideológico y cultural, esta razón, entre otras conducen a aseverar que la solución no solo reside en el enfrentamiento sino que también la prevención juega un papel fundamental en ese empeño.

Sí caracterizamos la corrupción administrativa en el país en la actualidad podemos aseverar que ha alcanzado determinada complejidad, se incrementan los hechos detectados, se radican una mayor cantidad de procesos, por ende, participan mayor cantidad de personas y los modus operandi se han diversificado de manera tal que dificultan las investigaciones, de esta realidad se identifica la necesidad de atacar los orígenes de este fenómeno.

## **DESARROLLO**

### **Fundamento legal de las verificaciones fiscales.**

La Ley número 83 de 1997, de la Fiscalía General de la República en su artículo 8 inciso (m) establece que para el cumplimiento de sus objetivos la institución tiene entre otras, la función de *participar en las tareas de prevención del delito y en la lucha contra toda manifestación de delincuencia o conducta antisocial, adoptando las medidas necesarias a ese efecto*, como es lógico incluye la delincuencia económica o de cuello blanco como tradicionalmente se ha denominado, por lo tanto el carácter preventivo de las verificaciones fiscales y las investigaciones no solo constituye una política sino un pronunciamiento legal.

En el sistema de trabajo de la Fiscalía cubana, esta actividad puede definirse como una investigación realizada por los fiscales, asistidos de especialistas en diferentes materias, según la actividad a verificar, que tiene como objetivo fundamental comprobar el cumplimiento de las normas generales y específicas en las entidades, en materia de uso, destino, producción y consumo de recursos materiales y/o financieros asignados para el cumplimiento de sus fines.

El artículo 7 de la Ley 83 de 1997, en su inciso (e) establece entre los objetivos del órgano *“combatir toda manifestación de abuso de poder y corrupción”*.

El artículo 22 de la precitada ley establece la facultad del órgano para verificar el cumplimiento de la Constitución y las demás disposiciones legales y su inciso (b) regula que el pronunciamiento resultante de esa labor debe contener las circunstancias que favorecieron las trasgresiones advertidas.

El artículo 18 del Reglamento de la Ley 83 norma la dirección metodológica de las verificaciones y las investigaciones a cargo de la Dirección creada al efecto.

## 2. Carácter preventivo de las verificaciones fiscales

### 2.1 Concepto de prevención:

Etimológicamente prevenir significa preparar y disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin, precaver, evitar o impedir una cosa, anticiparse a un inconveniente o dificultad.

En el contexto de las ciencias sociales y jurídicas este término ha sido explicado con bastante acierto desde el ángulo de la actividad delictiva, lo que sin dudas es válido para cualquier fenómeno social.

En este sentido, la Doctora Margarita Viera, por ejemplo, enfoca el concepto de prevención de los delitos como una categoría que encierra “(...) al conjunto de medios e indicadores elaborados por el Estado, las organizaciones políticas y de masas y las entidades estatales para minimizar el delito, sus causas y consecuencias, neutralizando sus efectos.”<sup>17</sup>

En ese sentido la prevención incluye todas aquellas medidas que pretendan reducir o contribuyen a reducir de cualquier modo la delincuencia.

Otros autores aseguran que la prevención debe contemplar no sólo la delincuencia *stricto sensu*, sino también los comportamientos antisociales o desviaciones al cumplimiento de la ley, que constituyen, por decirlo de algún modo, una especie de etapa previa a la delincuencia.

La corrupción administrativa por su parte se exterioriza en ocasiones a través de la comisión de hechos delictivos, por lo que debemos estar en condiciones de diferencias cuando estamos ante una conducta delictiva y/o antes una actitud corrupta.

El primero de los términos, es decir la corrupción administrativa es algo más que la apropiación de recursos, pues para que esta sea calificada como tal requiere además que en la actuación de la persona se evidencie una desnaturalización de los valores éticos, que se exterioriza en abusar de las prerrogativas asignadas, obtener provechos personales o a terceros a su costa, entre otras deformaciones no acorde con la moral.

Según la Ley 107 de 2009 “De la Contraloría General de la República la corrupción administrativa, es la actuación contraria a las normas legales y a la ética por los cuadros, dirigentes, funcionarios del Estado, el Gobierno y de otras organizaciones consideradas sujetos de la Contraloría General de la República, en el ejercicio de su cargo o en el desempeño de la función asignada; caracterizada por una pérdida de valores ético-morales, incompatible con los principios de la sociedad cubana, que se comete para satisfacer intereses personales o de un tercero, con el uso indebido de las facultades, servicios y bienes destinados a la satisfacción del interés público o social para obtener beneficios materiales o ventajas de cualquier clase y que tiene como base el engaño, el soborno, la deslealtad, el tráfico de influencias, el descontrol administrativo y la violación de los compromisos contraídos al

---

<sup>17</sup>Margarita Viera, Criminología, Edit. Pueblo y Educación, 1987, pág 26.

*acceder a los cargos; cuyas prerrogativas fueron empleadas en función de tales actividades de corrupción.*

Es indudable que ambos flagelos se estudian como fenómenos sociales negativos y en las acciones de prevención si advierte una identificación para uno y para el otro.

## **2.2 Papel de las verificaciones fiscales en la prevención del flagelo.**

Las verificaciones fiscales, también las investigaciones, como ya se expresó, son procesos de averiguaciones y pesquisas donde sus ejecutores actúan para determinar las trasgresiones de la legalidad, sus responsables, los modus operandi, cuando la violación se produce intencionalmente, las afectaciones económicas provocadas por el actuar de los trasgresores, entiéndase daños y perjuicios y **el establecimiento de las causas y condiciones de las violaciones detectadas.**

En este último aspecto reside el valor estratégico y preventivo que caracteriza esta actividad en el sistema de trabajo de este órgano del Estado.

Si nos auxiliamos para estas valoraciones en la Criminología, como ciencia, y utilizamos sus términos, conceptos y métodos; las verificaciones fiscales pueden conceptualizarse como un proceso de investigación, dirigido entre otros fines, **a definir los determinantes criminógenos** que intervienen en las trasgresiones de las normas **y procura las líneas para la eliminación de los mismos.**

Estas violaciones se manifiestan en indisciplinas, hechos delictivos y actos de corrupción.

Entendido como determinantes criminógenos los factores, causas y condiciones que dan paso directa o indirectamente a la existencia de una violación.

Las causas son hechos o fenómenos que por sí mismos son capaces de lograr un resultado, tienen una influencia directa en la existencia de una transgresión.

Las condiciones son hechos o fenómenos que propician o contribuyen a la existencia de un resultado trasgresor, el ejemplo más típico se produce cuando describimos la responsabilidad colateral de los superiores jerárquicos que no influyen en sus subordinados para evitar que estos cometer errores teniendo el deber de hacerlo.

Las causas de cualquier fenómeno social pueden ser de índole objetivo como subjetivo por lo que la acción de control puede señalar tanto unas como las otras, no obstante aquellas que dependen de la voluntad y la conciencia de las personas tienen un valor superior para materializar el carácter preventivo de estas acciones.

Esta afirmación se fundamenta en el hecho de que no existen mecanismos de control y recursos en función del mismo, capaz de sustituir la ética y la vergüenza de los hombres, por lo tanto cuestiones objetivas que pueden estar asociadas a regulación legales incompletas, estructuras administrativas incompletas o recursos necesarios que se comporten deficitariamente para una actividad, por solo

poner algunos ejemplos, pueden asistir como causa a determinada desviación o violación de las normas, pero no a una actuación indebida que genere beneficios personales o para terceros.

Luego, entonces la verificación coadyuva a la disminución de los factores negativos que favorecen la corrupción administrativa, resaltando los elementos que asistieron o intervinieron en la deformación de la conducta de un directivo, propiamente de los casos de actos de corrupción administrativa.

Si contextualizamos este fenómeno en las condiciones actuales del país sigue produciéndose con mayor énfasis en la circulación de mercancías y la realización de la producción y los servicios, continua mayoritariamente en los niveles medios de dirección estatal, aunque se han conocido casos en los niveles superiores, las afectación al país crecen fundamentalmente en las actividades con vínculos con el capital foráneo y en otras de la economía interna donde se destinan altas cifras de recursos financieros y materiales por lo sensible de la actividad.

Este panorama demuestra la necesidad de mayor cantidad de medidas de control y protección de los bienes del Estado a través de las verificaciones fiscales.

En esencia, la verificación fiscal permite descifrar los factores que intervinieron en la deformación de la conducta de los directivos, la utilización indebida de los recursos asignados y la apropiación de otros, los que pueden ser evaluados en tres grupos, que van desde los elementos asociados a la realización propia de la economía, su organización, hasta la actividad de los órganos de control y protección jurídica. Esta subdivisión facilita su estudio.

El primer grupo, es decir en los factores asociados a la realización de la economía, la estrategia que ha desarrollado la institución en los últimos años ha permitido direccionar la ejecución de los trabajos hacia las ramas, sectores y actividades donde el país realiza los principales esfuerzos, que por pura lógica es donde se ubican la mayor parte de los recursos materiales y financieros con que cuenta la nación.

Las investigaciones, partiendo de lo anterior, se dirigen a establecer los factores subjetivos que inciden en la ineficiencia de la actividad fundamental, las dificultades con los procesos de licitación y contratación, fundamentalmente en los vínculos con el capital extranjero, con cierto énfasis en los procesos inversionistas, aunque en la economía interna no se toma el camino correcto en esta materia, las desviaciones en el cumplimiento del objeto social o empresarial, la dilapidación o desvíos de los recursos, en actividades como la producción y comercialización de productos alimenticios, entre otros, detrás de lo cual no en pocas ocasiones se engendran actos de favorecimientos, de beneficios personales y ventajas de cualquier tipo en ocasión del cumplimiento de funciones públicas o privadas de algunos directivos.

En el grupo de los factores asociados a la organización de la economía, que están asociados a los mecanismos establecidos en cada actividad para el ejercer el control sobre los recursos y los resultados económicos en los que juega un papel importante la acción del hombre.



En este, la investigación permite alertar sobre las fisuras del sistema de control interno que en ocasiones se torna inoperante desde su surgimiento y en otras carece de la flexibilidad necesaria para adecuarse a los constantes cambios que sufre la vida económica y social de cualquier Estado. La experiencia ha demostrado que cuando se detecta un hecho con las características de ser un acto corrupto, este viene aparejado a insuficiencias en el control de los recursos.

Por otra parte, la verificación fiscal pone de relieve los casos donde, además ha faltado el control administrativo directo, que va mas allá del control contable, económico y financiero y transita por la conducta, modo de actuar y de vida de los directivos. La verificación fiscal con una caracterización previa de los principales directivos puede alertar de las causas y condiciones que estén influyendo, por ejemplo, en el incremento injustificado y en poco tiempo del nivel de vida de personas con responsabilidad en el manejo de recursos y en el ejercicio de funciones públicas o privadas con intereses para el Estado.

En los factores asociados a la actividad de los órganos de control y protección jurídica la investigación va dirigida a determinar las debilidades de la obligada influencia que deben ejercer los órganos superiores sobre los inferiores, es decir la responsabilidad colateral.

Un tema polémico, pero necesario, ha sido la determinación de la **responsabilidad colateral** que con frecuencia se convierte en una condición que propicia una violación, esta aunque desde hace algún tiempo se venía exigiendo, quedó institucionalizada con la actualización de los Decretos Leyes 196 y 197 del Consejo de Estado de la República de Cuba, de 1ro de Agosto 2007, a través del Decreto Ley 251 de esa fecha.

La que expresa en los términos siguientes, tanto para los Cuadros como para los dirigentes y funcionarios del Estado y el Gobierno, según el caso:

El artículo 46 de la mencionada norma, en su inciso (n) expresa que, *se considera responsable colateral al cuadro (o Dirigente) que siendo superior jerárquico inmediato de los violadores o infractores, y sin tener participación directa en los hechos, por su falta de exigencia, o por su actuar negligente o por la no aplicación de los controles establecidos, facilitó la realización de las acciones violatorias de la disciplina por parte de los infractores, o que habiendo conocido de dichas violaciones e infracciones, no las enfrentó o no informó de inmediato dichas ocurrencias, a los niveles correspondientes;*

Esta institución, aunque rigurosa y enérgica por su tratamiento disciplinario, utilizada de manera racional, sin encasillamientos ni esquematismos, contribuye sin lugar a dudas a la prevención, pues se trata de una obligación de los niveles superiores de trabajar en función de evitar la ocurrencia de violaciones en los niveles que se le subordinan a través del cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten por razón de cargo.

Se trata entonces de que las investigaciones puedan establecer en qué casos a los niveles superiores le es exigible la realización de acciones o medidas que de haberlas realizado se hubieran evitado o detectado los hechos que constituyen violaciones, luego entonces siempre que se compruebe que los

superiores pudieron realizar alguna acción y no la hicieron o no fueron efectivas las realizadas, serán colaterales del hecho cometido, esta problemática es advertida también en las verificaciones fiscales.

### **2.3. Pronunciamiento del fiscal y su cumplimiento.**

La Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 20, faculta al fiscal en el ejercicio de sus funciones emitir resoluciones, con el fin de que se disponga el restablecimiento de la legalidad quebrantada, de cuyo pronunciamiento forman parte las causas y condiciones que favorecieron las violaciones detectadas en la investigación.

Este momento del accionar del fiscal resulta de medular importancia toda vez que permite fijar documentalmente, además de los hechos violatorios, sus responsables y los daños y perjuicios que se hayan producido, las circunstancias que favorecieron dichas trasgresiones <sup>18</sup>en las que incluyen aquellas que intervinieron en la desviación de la conducta de los autores de actos de corrupción.

La trascendencia de este momento no es solo lo anterior, sino que a partir de este pronunciamiento, que tiene efectos vinculantes, se derivan las acciones posteriores de las administraciones a quienes les corresponde establecer las medidas que conduzcan al restablecimiento de la legalidad, esto último en el entendido de que se restituye la legalidad cuando además de eliminar las violaciones, se hacen desaparecer las circunstancias en las que estas surgieron.

En este trámite la Fiscalía ejerce un papel preventivo insustituible toda vez que los planes de medidas dirigidos a restablecer la legalidad son evaluados por los fiscales ejecutores de la investigación momento en que se establece su objetividad y viabilidad para que las causas y condiciones sean eliminadas.

El punto culminante de la labor que realiza el órgano se identifica en las visitas de comprobación al cumplimiento del plan de medidas, en cuya acción se comprueba si las circunstancias ya alertadas durante la investigación y en el pronunciamiento documental del fiscal fueron eliminadas.

Como se aprecia, el ciclo de intervención de la Fiscalía en el enfrentamiento y prevención a la corrupción administrativa a través de las verificaciones fiscales, no concluye con la detección y enunciado de las circunstancias que favorecen los actos de corrupción, sino que llega hasta la evaluación de la efectividad de las medidas adoptadas para hacer desaparecer sus orígenes al interior de las entidades donde se producen.

## **CONCLUSIONES**

El sistema de trabajo de la Fiscalía General de la República, en sus diferentes especialidades tiene dentro de sus objetivos contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales. Ante el fenómeno de la corrupción administrativa, este objetivo se logra a través de las verificaciones fiscales, aunque el resto de las especialidades tienen su intervención, por lo que están institucionalizadas las acciones de prevención en el órgano.

---

<sup>18</sup>Artículo 22 de la Ley 83 de 1997 de la Fiscalía General de la República

Estas investigaciones tienen como valor estratégico, precisamente, la determinación de los factores que interactúan en el origen de las conductas corruptas, los que se pueden identificar desde los mecanismos de realización de la economía, su organización y en el papel de los órganos de control y protección jurídica.

Las acciones realizadas desde la misma investigación, el pronunciamiento de los fiscales, su intervención en la evaluación del plan de medidas y las visitas de comprobación al cumplimiento del mismo son momentos en los que la Fiscalía ejecuta actividades de prevención a las violaciones de la legalidad en sentido general y particularmente al delito y las manifestaciones de corrupción administrativa.

Este fenómeno social negativo en el país incrementa sus niveles de ocurrencia, va generando cada vez más afectaciones a la economía en detrimento de los esfuerzos de la nación para recuperarla y de los pasos certeros que se dan para la actualización del modelo económico social, por lo que la prevención debe ser el punto de partida para disminuirlo a niveles tolerables.

.....

## **TÍTULO: "DELITO ECOLÓGICO: SU TRATAMIENTO A PARTIR DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS PATRIMONIALES"**



**AUTORAS: Laura de la C. Arencibia Benítez      Maridel Guanche Delgado**  
**Universidad de Pinar del Río / Hermanos Saiz Montes de Oca**

### **INTRODUCCIÓN:**

El delito puede definirse como toda acción u omisión socialmente peligrosa, prohibida por la Ley bajo conminación de una sanción de tipo penal, lo cual quiere decir que solo las personas que incurran en las conductas delictivas que prevé nuestro Código Penal podrán ser sancionadas en virtud de las mismas, evidenciándose de forma manifiesta la vigencia del principio de "Legalidad de los delitos y las penas" en nuestro ordenamiento penal vigente. Lo trascendental en este sentido es que las relaciones jurídicas que se protegen en el ámbito del Derecho Penal son consideradas como bienes jurídicos, es decir, son relaciones que por su importancia para la sociedad deben ser salvaguardadas ante cualquier lesión que se les pueda provocar.

De ahí entonces que se pueda hablar de bienes jurídicos tales como: la vida y la integridad corporal, la libertad sexual, la economía, el medio ambiente, la propiedad, entre otros. Cada uno de ellos, sea cual sea su denominación o el contenido que comprendan, representa lo que para un Estado es vital proteger en aras de mantener el orden y la estabilidad en el desenvolvimiento de las relaciones sociales. Los bienes jurídicos mencionados con anterioridad son ejemplo vivo de los que pueden encontrarse en la mayoría de los Códigos Penales modernos, ya que se refieren a elementos que para el hombre resulta de especial interés, como es el caso de la vida o los derechos patrimoniales que se tienen sobre un bien determinado.

En el caso de los " Delitos Contra los Derechos Patrimoniales", tienen su fundamento esencial en los derechos de las personas sobre ciertos y determinados bienes de naturaleza corporal. Dichos derechos implican la posibilidad de usarlos, enajenarlos o simplemente destruirlos; pero cuando terceras personas atentan de forma ilegítima contra el normal desenvolvimiento de las facultades de dominio sobre un bien por su titular y a raíz de este hecho se tipifica alguna de las conductas previstas en el Código Penal como un delito, entonces los Tribunales pueden sancionar a esa persona.

En el caso particular de los delitos ecológicos es importante decir que también es conocido como delito medioambiental y se puede definir como el crimen contra el ambiente, que es sancionado gracias a la existencia de la legislación medio ambiental. El fundamento de su regulación se encuentra en el deber de todos los ciudadanos de participar en la protección de nuestro medio, entendiéndose este como un bien común que debe ser preservado. De ahí que la conceptualización del mismo ha estado determinada, en cada fase del desarrollo social, por el sistema de relaciones que en cada una de ellas ha predominado.

Muchas han sido las alternativas adoptadas por los diferentes Códigos penales en relación a cada una de las figuras delictivas que pudiesen configurarse en correspondencia con estas categorías generales que representan los delitos ecológicos y los delitos contra los derechos patrimoniales, cada una de ellas en franca armonía con las tendencias más representativas de las manifestaciones delictivas de estos tipos, dentro del grupo de relaciones sociales predominantes en cada sociedad. Lo que demuestra que el criterio común va dirigido a considerar que estos bienes jurídicos (el medio y los derechos patrimoniales) son relevantes y por tanto merecedores de una regulación formal y material dentro de los ordenamientos jurídicos penales.

En el caso particular de Cuba en el Código Penal (Ley # 62 de 1987), se prevén un grupo de figuras de delitos bajo el título de " Delitos contra los derechos patrimoniales", entre los cuales sobresalen: el hurto, el robo con violencia o intimidación en las personas, el robo con fuerza en las cosas, entre muchos otros, lo cual evidencia una postura encaminada al enfrentamiento de conductas de este tipo. Mientras que, desde el punto de vista del delito ecológico, no aparece nada concreto que demuestre un interés dirigido a la protección de este importante bien, solo se aprecia una alusión, que pudiera considerarse indirecta, cuando regula un grupo de delitos que esconden bajo el hecho de una protección efectiva de otros bienes jurídicos, la intención de introducir conductas, que en buena técnica jurídica, pudiesen configurarse como delitos contra el medio. Tal es el caso del artículo 238.1 de esta propia Ley: "Contaminación de las aguas", que se encuentra como una de las figuras que protege a la economía nacional.

La solución esencial que se le ha dado a esta problemática es la de tratar o resolver las consecuencias que se derivan de los llamados delitos ecológicos, en dependencia de la correspondencia de estos con otras figuras delictivas dentro del Código, amén de que estas se encuentren establecidas en él para proteger otros bienes jurídicos. Por lo que resulta cuestionable en este sentido el hecho de que cómo no se va a proteger de forma directa un bien que está refrendado en la Constitución de nuestro país.

Es por esto que una de las salidas que se le ha dado al delito medioambiental, ha sido su tratamiento desde la óptica de los delitos contra los derechos patrimoniales, de ahí que algunos hechos de tala ilegal de árboles de maderas preciosas, lo que puede llegar a ser perjudicial para el ecosistema boscoso, se pudiera llegar a resolver en sede judicial si se califica como un delito de Hurto. Desde esta consideración particular pueden visualizarse algunos elementos que pueden estimarse como incompatibilidades entre estas manifestaciones delictivas, entre las que se destacan, el hecho de que los delitos contra los derechos patrimoniales están dirigidos a proteger la propiedad o el conjunto de facultades que se tienen sobre los bienes que pueden constituir el objeto de estos actos delictivos; mientras que los delitos ecológicos están dirigidos a la protección de todos los elementos que conforman el medio, debido a la trascendencia que poseen en aras de conservar la vida en el planeta.

Por otro lado se pudiera decir que la causa principal de este primer grupo de delitos es la del ánimo de lucro, mientras que las de los delitos contra el medio ambiente pueden ser bien diversas e ir desde el ánimo de obtener ganancias o beneficios económicos hasta el incumplimiento de normativas de corte administrativo reguladoras de algún proceso productivo.

Por todo lo anterior, consideramos que cada uno de estos bienes debe protegerse de forma independiente y sin perder de vista que, aunque en algún momento puedan relacionarse los diferentes elementos que conformen los tipos penales que definan las conductas delictivas que puedan dañar a alguno de estos bienes, cuando se sanciona a uno o varios individuos por incurrir en ellas, en dependencia de cómo se tipifique la conducta asumida es que se reconocerá, por las personas, que realizar un acto de ese tipo contra ese bien jurídico es la causa de la sanción que se le va a imponer. Es decir, si se produce un acto nocivo para con el medio, pero se sancionan a los responsables por un delito de "Daños", no se estará transmitiendo, como mensaje, la necesidad de protegerlo, sino que lo más importante resulta la afectación material y económica que se provocó sobre un bien determinado.

## **DESARROLLO:**

### **CAPÍTULO # 1: Tratamiento, desde la doctrina y regulación internacional, de los delitos ecológicos y los delitos contra los derechos internacionales.**

En el caso de los delitos contra los derechos patrimoniales, es importante decir que desde tiempos antiguos el hombre trató de proteger aquellos bienes de los que se servía a diario, e incluso, antes de que surgiera el Estado y el Derecho las comunidades adoptaban medidas con aquellos que tomaban algún bien que no les pertenecía. Por supuesto, con el paso de una formación económica social a otra, las consideraciones sobre esta temática fueron cambiando hasta adoptar la configuración que hoy posee y que varía en dependencia del Sistema de Derecho que impere, así como tomando en consideración las condiciones sociales que subsistan en cada sociedad.

No obstante, existe una consideración más o menos común de lo que pudiera estimarse como delitos contra los derechos patrimoniales, los cuales consisten en el apoderamiento de bienes ajenos, con la intención de lucrar, empleando para ello disímiles circunstancias, que al variar de un hecho al otro determinan la existencia de un grupo de tipos delictivos dentro de esta misma familia. Entendiéndose como ánimo de lucro, la intención de obtener beneficios ilegítimos de bienes ajenos que pueden resultar propiedad del Estado o de particulares. Aunque dentro de esta categoría también pudieran incluirse aquellos tipos penales que impliquen la producción de un daño o afectación a un bien que no le pertenece sin una causa legítima para ello.

La necesidad de establecer en las legislaciones penales figuras de este tipo está más que clara, ya que la propiedad o el dominio sobre un bien es un derecho que se le reconoce a toda persona sea natural o jurídica. Por lo que la peligrosidad social de estos hechos es evidente, toda vez que, si no se protegiese como bien jurídico los derechos patrimoniales no se podría garantizar el ejercicio efectivo de los mismos y se pondría en riesgo la seguridad jurídica.

Aunque esta variará en dependencia de las circunstancias o hechos que propicien la lesión de estos derechos patrimoniales, de ahí que entre las figuras más importantes se puedan mencionar: el hurto, el robo con fuerza en las cosas y el robo con violencia o intimidación en las personas, donde estos dos últimos evidencian un mayor grado de peligrosidad social por lo que la sanción que se le impondrá a los implicados en hechos de este tipo será de mayor cuantía.

De lo expuesto hasta el momento puede precisarse como los aspectos más significativos al instante de calificar un hecho como delito contra los derechos patrimoniales:

1. LA COSA: Se requiere la existencia de una “cosa”, es decir, cualquier objeto susceptible de tener valor. El mismo debe tener la cualidad de poderse trasladar de un lado a otro, por lo que hasta una parte de un inmueble puede constituirse, por la acción del delincuente, como cosa mueble.
2. TOTAL O PARCIALMENTE AJENO: El objeto sustraído debe ser total o parcialmente de ajena pertenencia en relación con el sujeto activo del delito.
3. APODERAMIENTO: Mediante el apoderamiento ilegítimo, el autor del hecho quita el objeto a quien lo poseía legítimamente y a la vez pone de manifiesto su voluntad de disponer del bien como si fuese su dueño legítimo.
4. DAMNIFICADO: Puede ser cualquier persona que tenga legítimamente la tenencia de un objeto de naturaleza mueble, por lo que no necesariamente tendrá que ser el titular del mismo.

Debido a que las figuras delictivas que se recogerán bajo el título de los delitos contra la propiedad varían de un país a otro según las condiciones económicas que imperen en cada territorio, es que, a los efectos de este trabajo trataremos de analizar algunas de las figuras más comunes, ya que estas pueden ser encontradas en disímiles cuerpos normativos.

El hurto, consiste en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado este hecho sin aplicar fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas, con su comisión se viola la posesión material que se tiene sobre las cosas muebles, considerada esta como un mero estado de hecho que determina la relación jurídica que se da entre la persona y el bien. No se exige la legitimidad de la posesión por parte de aquel a quién inmediatamente se le sustrae la cosa; basta solamente que el apoderamiento sea ilegítimo en cuanto al otro. Es requisito indispensable del hurto, como de los demás delitos contra el patrimonio, la existencia de una intención especial del sujeto activo o autor del delito, lo que técnicamente se conoce como el elemento subjetivo del injusto que es precisamente el ánimo de lucro, es decir, la intención de obtener un enriquecimiento con la apropiación del bien.

Otro de los delitos contra los derechos patrimoniales que resulta bien común en las legislaciones penales es el de robo, en las dos modalidades que se puede presentar, una que se distingue por el empleo de la fuerza en las cosas y otra por la violencia o intimidación en las personas.

El primero es aquel en el que se emplea una determinada fuerza o violencia para acceder al lugar donde se encuentra la cosa o el bien. Lo cual le ha permitido a la doctrina precisar alguna de las circunstancias que se pueden dar para que se configure tal figura de delito, estas son:

- Escalamiento.
- Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
- Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.
- Uso de llaves falsas (ganzúas u otros instrumentos análogos, las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya una infracción penal, las tarjetas magnéticas perforadas, y los mandos o instrumentos de apertura a distancia.)
- Inutilización de sistemas específicos de alarma o vigilancia.

Por su parte el robo con violencia o intimidación en las personas es aquel caracterizado porque se ejerce una fuerza (*vis física*) o una intimidación (*vis compulsiva*) para vencer la resistencia del titular o poseedor de las cosas o bienes para así lograr su entrega. Debido a que esta figura en sus diferentes manifestaciones implica el ejercicio de la fuerza o de intimidación sobre las personas es que los marcos sancionadores se caracterizan por ser más amplios que los de las figuras anteriores.

Por su parte el delito ecológico o ambiental consiste en la acción típica, antijurídica y culpable o violatoria de disposiciones, dirigida a trastornar nocivamente el ambiente, desmejorando la calidad de la vida y merecedora de una sanción penal. Ha presentado diversas manifestaciones en su regulación, la primera de ellas es que solo se tipifican como tal aquellas conductas que por su gravedad no



pueden ser tratadas por la vía administrativa, lo cual se debe a la calificación del Derecho Penal como de última *ratio*. A lo que se une el hecho de que se han establecido un grupo de principios concretos reconocidos como limitativos del *ius puniendi*, entendido este como la facultad del Estado para sancionar a las personas por la comisión de algún delito. Dentro de estos preceptos generales podemos encontrar: el de legalidad, el de intervención mínima, igualdad, humanidad de las penas, proporcionalidad y resocialización.

Otro fenómeno que se puede dar con respecto a esta temática es que generalmente, las sanciones que se imponen son muy bajas o de poca magnitud, lo que se justifica con el planteamiento de que este tipo de delito se caracteriza por afectar intereses difusos, es decir, no precisables, lo que trae aparejado una dificultad al momento de delimitar las responsabilidades jurídicas. Además de ser delitos que atraen la polémica, debido a las posiciones diversas que sobre él se tienen, son además multicausales y requieren para su esclarecimiento de un gran esfuerzo por parte de los órganos de administración de justicia ya que deben servirse de los adelantos de la ciencia y la técnica para ello.

En sentido general se han determinado como lo que comprende el delito ecológico, los siguientes elementos:

- Emisión de agentes contaminantes que puedan afectar el agua, el aire, el suelo o la salud humana o de los ecosistemas.
- La puesta en riesgo de especies de la flora y la fauna que se encuentran en peligro de extinción, ya sea por su tráfico o por la destrucción de su hábitat.
- La puesta en peligro de las personas o del medio por una mala gestión de los desechos nocivos, tóxicos o radioactivos.
- Explotación o sobre explotación ilegal de un recurso determinado (deforestación, sobrepesca y otros).

Algunas de las figuras de delitos que son en nuestros días reflejadas por la legislación penal son, entre otras:

- Delito urbanístico. El bien jurídico que se protege es el uso racional de los suelos, debido a que se considera a la actividad urbanizadora como una de las que más degrada el ambiente.
- Delito contra los recursos naturales: Las acciones que se regulan como prohibidas dentro de estas conductas, generalmente son: las emisiones, los vertidos, radiaciones, extracciones, excavaciones, ruidos, vibraciones y depósitos, que puedan atacar directa o indirectamente la atmósfera, los suelos, subsuelos y las aguas terrestres marítimas o subterráneas. En este caso el bien jurídico protegido es el equilibrio de los sistemas naturales. Este tipo penal se ha configurado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos porque es una figura de peligro concreto, en virtud de las cuales no solo se deberá probar la existencia de un daño, sino que efectivamente este representa un riesgo para el ambiente.



- Delitos relativos a espacios naturales protegidos. En este caso sí existe una esfera de protección más clara y definida, porque de lo que se trata es de penar a aquellas infracciones que atenten contra los elementos que se encuentren dentro de esa área determinada y que además sean por los que ese espacio haya recibido esta denominación o condición.
- Delitos relativos a la protección de la flora y la fauna. Las figuras de este tipo lo que buscan es sancionar el tráfico ilegal o una serie de conductas dirigidas a causar daños a aquellas especies de la flora o la fauna que se encuentren amenazadas o en vías de extinción. Esta incluye la recolección, la caza y la pesca en zonas no permitidas o de especies prohibidas para estos fines, pero también ha buscado incluir el tráfico de los restos de estas especies, dígame colmillos, cuernos, plumas, huevos, etc.
- Delitos relativos a la energía nuclear y las radiaciones ionizantes. Esta es una de las figuras de más reciente creación, y busca sancionar a aquellos que intencional o imprudentemente liberen energía nuclear o elementos radioactivos que puedan poner en peligro, en primer lugar, la vida o la salud de las personas y luego el medio en sentido general.
- Delitos de incendios forestales. La acción penalizada es la de prender fuego y que este se extienda, provocando como consecuencia un incendio. Este será entonces un tipo penal caracterizado por la producción de un daño concreto en la realidad material. En este caso en particular la afectación deberá producirse en las masas forestales.

Estas figuras de delito: delitos contra los derechos patrimoniales y delitos medioambientales, están íntimamente relacionadas, sobre todo porque resultan ser figuras pluriofensivas, es decir, la acción u omisión que se deriva de ellas puede afectar a diferentes bienes jurídicos. De ahí que con la configuración de un delito de Daños, por solo mencionar un ejemplo, además del posible menoscabo patrimonial, se pudiera ocasionar un deterioro al medio ambiente, que en muchas ocasiones resulta ser irreversible.

Otro punto de conexión entre estos tipos penales constituye el hecho de que la motivación fundamental, en muchas ocasiones, sea el ánimo de lucro, es decir, la intención de obtener ganancias patrimoniales de forma ilícita. De esto es muestra el tráfico del cual es objeto muchas de las especies de la flora y la fauna. Por lo que para en muchas ocasiones, poder diferenciar, una figura de la otra se debe realizar un análisis profundo de las implicaciones de las conductas producidas, o sea, se debe discernir entre si el daño resulta más nocivo a las relaciones patrimoniales o a las medioambientales. Ese es el elemento esencial a tomar en consideración para distinguir un tipo penal del otro.

A pesar de los elementos que nos demuestran que existe una estrecha relación entre estas figuras, existen otros que evidencian las incompatibilidades presentes en las mismas. Muestra de ello lo es el hecho de que generalmente los delitos contra los derechos patrimoniales constituyen conductas de daño, es decir se sanciona por la afectación real provocada a las relaciones sociales, específicamente a las relaciones de propiedad. Mientras que los delitos medioambientales, para lograr su objetivo

específico que es prevenir el daño ecológico, lo realizan a través de figuras, por lo general, de peligro, ya sea abstracto o concreto.

En relación al análisis anteriormente brindado, es importante señalar que en estos tipos de delitos la responsabilidad penal no es analizada de la misma forma; ya que en la mayoría de los casos de los delitos contra los derechos patrimoniales, es posible determinar con claridad el o los sujetos comisores del delito y su correspondiente imputación, en cambio en los delitos ecológicos, en muchas ocasiones es bien complejo determinar el nivel de responsabilidad, porque se plantea en la doctrina que este ataca intereses difusos o no precisables, es decir, intereses colectivos, de carácter altruista. Por lo que resulta vital que cada uno goce, por su trascendencia, de protección independiente dentro de las legislaciones penales.

## **Capítulo # 2: Tratamiento del delito ecológico a la luz de la regulación jurídica de los delitos contra los derechos patrimoniales.**

En Cuba, desde el triunfo de la Revolución se adoptaron un grupo de medidas de vital importancia para la protección del medio ambiente, entre ellas sobresalen la reforestación de los bosques cubanos y la protección de ciertas áreas, a partir de su identificación bajo el rubro de ciertas categorías ambientales, sobre todo por la presencia de especies de la biodiversidad propias o autóctonas de nuestro país. También se crearon un grupo importante de normas jurídicas, específicamente de carácter administrativo, con el propósito de proteger de forma adecuada al medio.

Con el desarrollo del turismo como actividad económica fundamental se potenció el turismo ecológico, como una vía no solo para obtener beneficios económicos sino también como un medio para mostrar al hombre las bondades de una interacción sana con el medio. Tampoco debemos dejar de mencionar cómo nuestro país ha fomentado el desarrollo de una educación ambiental desde edades bien tempranas, ya que ha insertado la temática en los disímiles niveles de enseñanza educacional y además ha hecho a los medios de comunicación, portadores de la misión de llevar a cabo una divulgación efectiva de las temáticas medioambientales.

No obstante, todos los esfuerzos que lleva a cabo nuestro país, se reconoce que queda mucho por hacer, sobre todo en estos momentos en los que el mundo se prepara para la celebración de la Cumbre Río + 20, en la que se tienen centradas todas las expectativas, tras el fracaso que significó Copenhague, en la que los países no pudieron lograr una decisión unánime con respecto a una situación tan compleja como es el cambio climático. En este nuevo espacio de reunión se tocarán materias relacionadas con la necesidad de fomentar un desarrollo sostenible como alternativa a la crisis económica mundial.

Actualmente el tema de las relaciones medio-ambientales en general es tratado por diferentes teóricos desde varias ópticas, tanto desde el punto de vista constitucional, penal, como administrativo y encuentra sustento normativo en cada una de las ramas de Derecho antes mencionadas.

En Cuba la protección al medio ambiente se evidencia tácitamente en la Constitución de la República de 1976, donde se regulan algunos derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que se destaca el privilegio de gozar de un ambiente sano y disfrutar de una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; pero a la vez establecen como un deber de estos y del Estado para con el ambiente, contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza. De ahí que nuestro Estado se proyecta constitucionalmente en pos de establecer una política ambiental capaz de garantizar la protección del medio ambiente.

Por otra parte, se ha regulado administrativamente en varios instrumentos jurídicos como la Ley No. 81 del Medio Ambiente, que refrenda lo relativo a las bases, principios y categorías medioambientales y su reglamento, el Decreto- Ley 200 de 20 de diciembre de 1999, de contravenciones, que reglamenta las formas de proceder del aparato administrativo en cuanto a las infracciones realizadas contra el medio ambiente y la correspondiente sanción según el daño acaecido.

En otro sentido podemos referirnos a la inclusión, que desde diversas figuras de delito, se hace del medio ambiente en nuestro Código Penal. Esta rama del Derecho protege algunas de las relaciones sociales que se establecen respecto al tema del ambiente, siempre y cuando la acción u omisión llevada a cabo produzca daños actuales o potenciales a diferentes bienes jurídicos de gran importancia como los recursos minerales y naturales, por citar algún ejemplo. En consonancia a esto, se han reconocido varios delitos relacionados con la contaminación de las aguas y otras actividades ilícitas con respecto a los recursos naturales de las aguas territoriales y la zona económica de la República, no como conductas delictivas del ámbito ecológico, sino como meras infracciones delictuosas que contravienen la estabilidad de la economía nacional, siendo en este caso el bien jurídico particular que se pretende proteger (el normal funcionamiento de la economía nacional) o la salud y la seguridad colectiva.

Pero a veces se torna controvertido y muy usual encontrar en nuestras salas de lo penal de los Tribunales Populares la celebración de juicios, donde se le acusa a un sujeto por un delito de Daños o de Hurto, cuando los hechos narran que ha sido sustraída cierta cantidad de madera perteneciente a una Empresa Forestal de nuestra provincia o como consecuencia de la negligencia de una persona se incendió un bosque determinado. En este caso se ve protegido como bien jurídico particular los derechos patrimoniales y como bien jurídico individual, la propiedad. En este aspecto también se obvia sancionar o castigar partiendo del presupuesto de daño o violación acaecida contra el medio ambiente, es como si dicho deterioro se subsumiera una vez penado al infractor por el delito de Hurto o de Daños o por la exigencia de la responsabilidad civil de acuerdo a la afectación producida.

La protección del medio ambiente se realiza a través de la vía administrativa, la cual propone un grupo de sanciones aplicable a los sujetos que infringen el orden ambiental establecido por las autoridades competentes para ello. Por lo que no se cuenta con una normativa penal aplicable a las relaciones socioeconómicas que se establecen entre el hombre y el medio que lo rodea; pudiéndose producir, en ocasiones, daños inminentes e incluso aun irreversible. De esta forma podría exigirse responsabilidad tanto penal como civil a las personas naturales y jurídicas que ejerzan una acción en

virtud de la vulneración de un privilegio tan importante como lo es el derecho a un medio ambiente sano.

La necesidad de incluir, en nuestro Código Penal, la protección del medio ambiente como un bien jurídico particular ha sido oportunamente propuesta por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

## CONCLUSIONES

En el Derecho Comparado se puede apreciar una protección coherente de los delitos ecológicos, ya que se han incluido en los Códigos penales, otorgándoles una autonomía y sistematicidad dentro de la propia ley, como bienes jurídicos individuales.

Puede evidenciarse un deterioro al medio ambiente en algunas figuras previstas en el título de los delitos contra los derechos patrimoniales, como el Hurto, el Robo con fuerza en las cosas, el Robo con violencia e intimidación en las personas, la Malversación, la Receptación y los Daños.

Con respecto a los delitos contra los Derechos Patrimoniales cuyo bien jurídico individual es la protección de la propiedad, podemos decir que en muchos casos se afecta al medio ambiente, debido a la naturaleza pluriofensiva de estos delitos. Lo que sin apreciarse como una desprotección absoluta del medio, no resulta suficiente, pues no funge en un título del Código Penal como bien jurídico protegido. Por lo que la ley penal debe garantizar la protección del ambiente, no con sanciones aisladas que persigan objetivos diferentes, sino con la inclusión de todas las figuras ya existentes en nuestra legislación penal que resultan perjudiciales al medio ambiente, en un título del Código Penal con una regulación en alguna medida independiente, reservándose para el futuro la posible inclusión de nuevas conductas de esta índole.

Estamos conscientes de que solamente con normas jurídicas no se resuelve el problema de la protección de nuestro medio ambiente, pues es necesario un trabajo educativo amplio y profundo y además, es imprescindible que esta actividad sea de la responsabilidad, de un único organismo del Estado, en el que se depositen todas las facultades para poder planificar y controlar el uso y la protección de nuestros recursos naturales.

## BIBLIOGRAFÍA

Brailovsky, Antonio Elio, "Delitos ecológicos y seguridad ambiental". Tomado de [¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.](#) , consultado el 10 de abril de 2012 a las 9:00 am.

Castañeda Pérez- Lic. Héctor. 1992, "El delito ecológico en Cuba y su penalización". Tomado de <http://vlex.com/> , consultado el 10 de abril de 2012 a las 9:00 am.

Colectivo de autores, "Derecho Penal Especial", Editorial Félix Varela San Miguel No. 1111 e/Mazón y Basarrate, Vedado, Ciudad de La Habana.

"Delincuencia ecológica: su prevención." Tomado de ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. , consultado el 10 de abril de 2012 a las 9:00 am.

"Delitos contra la propiedad". Consultado en <http://monografía.com> el 12 de abril del 2012.  
Grillo Longoria, José A. "Los delitos en especie", Tomo II, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 1983.

Hernández Pozo, Lic. Israel, "Importancia de la protección penal del Medio Ambiente en Cuba". Tomado de <http://www.estrucplan.com.ar/> , consultado el 15 de abril de 2012 a las 11:00 am.

Navarro Borges, Vinmaris, "La regulación de los delitos de Apropiación Indevida y Malversación. Generalidades". Tomado de <http://www.monografía.com/> , consultado en abril de 2012.

Medina Cuenca, Arnel." El expansionismo del Derecho Penal y su expresión en el incremento de las penas en el siglo XXI". Consultado en Revista Cubana de Derecho No 38 (Julio-Diciembre del 2011) Editora UNIJURIS

Quirós Pires, Renén. "Manual de Derecho Penal II ", Editorial Félix Varela, La Habana 2005.

#### **LEGISLACIÓN:**

Constitución de la República de Cuba, 24 de febrero de 1976.

Ley No. 62 de 1987, Código Penal cubano.

Ley No.81 del Medio Ambiente.

Ley 200 de 23 de diciembre de 1999, Reglamento complementario a la Ley No.81 del Medio Ambiente.

.....

## PRISIONEROS DEL IMPERIO

### DECLARACIÓN FINAL DEL XI ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2012

Los participantes en el **XI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2012**, somos conscientes de las violaciones al debido proceso, al juicio justo y al jurado imparcial, así como a la aplicación de penas y castigos crueles que tuvieron lugar desde el inicio de la detención de CINCO LUCHADORES ANTITERRORISTAS, hasta la actualidad, por el solo hecho de advertir a su Patria, sobre las acciones que se organizan y financian desde territorio de los Estados Unidos contra Cuba, que han causado daños irreparables e incluso la muerte a miles de compatriotas.

**Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez, René González Schweret**, apresados en septiembre de 1998 enfrentaron un proceso judicial amañado, ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, donde a pesar de la ausencia de pruebas, fueron declarados culpables por el Jurado, de todos los delitos que les imputaron, recibiendo arbitrarias condenas.

Hoy, los Héroes Prisioneros del Imperio están presentes en cada movimiento que se gesta en la Isla y fuera de esta; su legado y profundas raíces revolucionarias son un paradigma a seguir en todo el mundo.

Cumplidos 14 años de su injusto encarcelamiento, es momento de exigir una vez más la liberación de Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González, Gerardo Hernández, y René González. Alcemos las voces de los Fiscales y Juristas presentes en este foro, para exigir se revoken los delitos por los que fueron condenados los **CINCO**. Es hora de que la justicia llegue a este caso y el momento idóneo es este, cuando la propia Jueza que les juzgó conoce de proceso extraordinario que transcurre por la vía civil, al argumentarse la violación de derechos constitucionales, en combinación de lo preceptuado en el sistema legal de Estados Unidos, sobre nueva evidencia.

El principio de legalidad obliga a los fiscales, actuantes en representación del Gobierno de los Estado Unidos, a la revocación de las condenas ante la contratación ilícita de periodistas, entregándoles información tergiversada de la verdad material sobre el caso de los Cinco.

Particular connotación en la revocación de los delitos tiene la negativa en la entrega de información en poder de los estadounidenses por la que condenaron a Gerardo Hernández Nordelo, vinculándolo a la decisión soberana del Gobierno Cubano, al impedir violaciones de su espacio aéreo.

Estos reclamos son reiterados por los abogados de los Cinco, en la reciente Moción presentada el 6 de junio, por la que se **solicita una audiencia oral, así como que la Corte ordene al Gobierno entregar**

**documentos y otros materiales que obran en su poder y que no han sido dados a conocer durante el proceso legal.**

La batalla por su liberación de los Cinco, no es solo una tarea de los cubanos, es hoy un compromiso con la justicia, con la verdad, asumido por disímiles personas, organizaciones y naciones de todo el mundo.

**Por todas estas razones, LOS DELEGADOS AL XI ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2012,, condenamos las brutales violaciones de los derechos humanos a que son sometidos los Cinco Héroes Prisioneros del Imperio y exigimos:**

- **La revocación de los delitos por los que fueron condenados y la inmediata libertad de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez, y René González Sechwerert.**

**La Habana, 04 de octubre de 2012**

## GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS

- **Delito ecológico:**

Un **delito ecológico** o **delito medioambiental** se puede definir como un crimen contra el medio ambiente que es sancionado gracias a la existencia de legislación medioambiental. La expresión es una noción jurídica reciente por lo que no cuenta con una definición unánime, lo que no impide que sea reconocida por la mayoría de los países. Así, la Interpol, como organización policial internacional, empezó a luchar contra el crimen medioambiental en 1992.

Tomado de: [http://es.wikipedia.org/wiki/Delito ecol%C3%B3gico](http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_ecol%C3%B3gico)

- **Lavado de dinero:**

El **blanqueo de dinero** (también conocido en algunos países como **lavado de dinero**, **lavado de capitales**, **lavado de activos**, **blanqueo de capitales** o **legitimación de capitales**) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Tomado de: [http://es.wikipedia.org/wiki/Lavado de dinero](http://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero)

- **Narcotráfico:**

El **narcotráfico** es una actividad multietápica ilegal globalizada que radica en el cultivo, fabricación, distribución de etapas comerciales, control de mercados, venta de drogas ilegales y reciclaje de utilidades inherentes. Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión legal (ciertos fármacos que la contienen, además: tabaco, alcohol, café, etc.), en la mayoría de los países la ley prohíbe la venta e incluso el ofrecimiento o posesión de algunos tipos de drogas. El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios cárteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los carteles varían en tamaño, consistencia y organización. La cadena va desde los traficantes callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, también llamados "*camellos*", a los jefes de los carteles que controlan y dominan la producción y distribución. Estos son los que, junto a los intermediarios financieros que les ayudan a



'potabilizar' el dinero conseguido, dominan el bajo mundo de las drogas. Estas se desplazan por intermediarios que pueden asimilarse a contratistas. Estos imperios multinacionales rivalizan en tamaño con los estados nacionales. Se involucran en elecciones, infiltran aparatos de Estado y los medios masivos de comunicación y conviven con algunos agentes de la banca y de la industria formal (la raíz "narco" proviene del griego *grob*, «sopor», somnolencia).

Tomado de: <http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico>

- **Tráfico ilegal de migrantes:**

La definición del tráfico de migrantes, lo encontramos en el Protocolo "contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire" complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional el cual se define como:

La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

Tomado de: <http://www.observatoriotrata.org/delitotrata/2>

- **Trata de personas:**

La **Trata de personas** o **comercio de personas** (en inglés *Human trafficking*) es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud.

Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos, también se lo denomina la esclavitud del siglo XXI. Es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas consagradas en la carta magna. Esto envuelve la capitulación y el transporte ilegal de humanos.

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (más conocido como Protocolo contra la trata de personas) fue adoptado en Palermo Italia en el 2000, y es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo contra la trata de personas es uno de los tres protocolos aplicados para complementar la Convención.

Tomado de: [http://es.wikipedia.org/wiki/Trata\\_de\\_personas](http://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas)

- **Terrorismo:**

El **terrorismo** es el uso sistemático del terror, para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por

corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores, ecologistas y gobiernos en el poder.

El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia política que se distingue del terrorismo de estado por el hecho de que en éste último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra.

La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra.

La palabra "terrorismo" tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definición precisa.

Tomado de: <http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo>